

LeFortune (Barcelona).

Adios Capitalismo.

Agustin V. Startari.

Cita:

Agustin V. Startari (2026). *Adios Capitalismo*. Barcelona: LeFortune.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/agustin.v.startari/255>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p0c2/EMo>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ADIÓS CAPITALISMO

— ✦ —
RECUPERAR LA HUMANIDAD
MÁS ALLÁ DEL MERCADO



| AGUSTIN V. STARTARI |

En una época en la que el cambio climático y la desigualdad económica constituyen problemas apremiantes, el autor Agustín V. Startari presenta una solución innovadora en su libro, «Ciao Capitalism». Startari explora una economía que no solo procura maximizar las ganancias financieras, sino que también prioriza el bienestar de la sociedad y del medio ambiente.

En lugar de centrarse en la propiedad y el control individuales, el libro aboga por la solidaridad y la participación colectiva en la gestión empresarial. La economía circular y regenerativa busca reducir los residuos y las emisiones al tiempo que regenera los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, la economía democrática promueve la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones en la propiedad y el control de los medios de producción.

A lo largo de estas páginas, Startari profundiza en cada uno de estos conceptos y ofrece un análisis detallado de cómo pueden implementarse. Al plantear soluciones concretas a los actuales desafíos económicos, sociales y ambientales, este libro se convierte en una guía esencial para quienes buscan construir un futuro más justo y sostenible.

Esta colección reúne trabajos de investigación independientes que exploran el poder, la ideología, la legitimidad y la historia desde una perspectiva interdisciplinaria. Cada volumen es autónomo, pero contribuye a un hilo conductor común: el análisis crítico de cómo se forma, se ejerce y se sostiene el poder a lo largo del tiempo. Desde el Antiguo Egipto hasta los totalitarismos del siglo XX,

Work Papers presenta una narrativa clara y sustentada académicamente sobre los mecanismos históricos y discursivos que configuran nuestras sociedades. Cada entrega está numerada para reflejar su lugar dentro de esta serie en evolución.

Título original: Ciao Capitalism: A Journey towards a Sustainable Future.

Serie: Working Papers #9

Diseño de portada: Visual Art Design

Editor: Martin Hein, 2026

Editorial: LEFORTUNE

ResearcherID: NGR-2476-2025

ORCID: 0009-0001-4714-6539

DOI: 10.5281/zenodo.22207749

©Agustín V. Startari, mayo de 2023

Primera edición: marzo de 2023

Segunda edición: mayo de 2025

Esta publicación debe citarse como: Agustín V. Startari, «Ciao Capitalism: A Journey towards a Sustainable Future», Working Papers, 9, Montevideo, 2023.

Esta obra ha sido publicada por LEFORTUNE para su distribución y puesta a disposición del público bajo el sello editorial LEFORTUNE en la plataforma en línea de esta editorial. Queda estrictamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de autor y bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

Colección
PAPELES DE TRABAJO
N.º 9

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	18
CAPITALISMO EN CRISIS.....	26
ESTUDIO DE CASO: El capitalismo estadounidense, análisis de la desigualdad y la dinámica económica.....	40
ECONOMÍA SOLIDARIA.....	77
ECONOMÍA CIRCULAR Y REGENERATIVA.....	86
ECONOMÍA DEMOCRÁTICA.....	92
LOS TRES MODELOS COMBINADOS.....	96
NUEVO MODELO ECONÓMICO.....	100
CONCLUSIONES.....	118
BIBLIOGRAFÍA.....	123

RESUMEN

Este estudio examina las tensiones sociales, económicas, políticas y ambientales asociadas con el capitalismo contemporáneo y desarrolla una alterna-

tiva integrada basada en la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática. Analiza la desigualdad, la precariedad laboral, la financiarización, la degradación ambiental y las concentraciones de poder económico y político, con especial atención a Estados Unidos. A continuación, evalúa los principios y los desafíos de implementación de la producción basada en la solidaridad, las prácticas circulares y regenerativas y la participación democrática en la toma de decisiones económicas. La propuesta central sostiene que estos enfoques pueden funcionar como dimensiones complementarias de una arquitectura económica orientada a la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza democrática y la eficiencia económica. A partir de la discusión histórica, ejemplos institucionales, datos secundarios y bibliografía, el estudio identifica puntos de convergencia y esboza un marco de transición que vincula estos principios con cambios institucionales y de políticas públicas coordinados.

Palabras clave: capitalismo; economía solidaria; economía circular; economía regenerativa; economía democrática; sostenibilidad; transición económica.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de investigación abordado por este estudio es la dificultad persistente de conciliar el desempeño económico con la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática dentro de la lógica institucional examinada en el marco del capitalismo contemporáneo. El manuscrito desarrolla este problema a través de la desigualdad y la pobreza, la precariedad laboral, la financiarización, la degradación ambiental y la concentración del poder económico y político.

Por lo tanto, el problema analítico no se limita a determinar si reformas aisladas pueden mitigar fallas individuales. Se refiere a si la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática pueden coordinarse como dimensiones complementarias de un marco económico coherente.

El estudio examina si su integración puede proporcionar una base institucional para una transición que combine equidad social, sostenibilidad ambiental, gobernanza democrática y eficiencia económica, al tiempo que identifica los mecanismos de políticas públicas y organizativos necesarios para su implementación.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La principal pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo pueden integrarse los principios de la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática en un marco económico coherente, y qué mecanismos institucionales y de políticas públicas son necesarios para sustentar una transición desde el capitalismo contemporáneo hacia dicho marco?

OBJETIVOS

Objetivo general. Desarrollar y evaluar un marco económico integrado que combine la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática como respuestas complementarias a las tensiones sociales, económicas, políticas y ambientales

examinadas en el marco del capitalismo contemporáneo, e identificar los mecanismos institucionales y de políticas públicas necesarios para una transición hacia ese marco.

Objetivos específicos. El estudio persigue los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar los principales patrones de desigualdad, precariedad laboral, financiarización, degradación ambiental y concentración del poder económico y político examinados en el manuscrito, con especial atención al caso de Estados Unidos.

2. Examinar los principios, las características institucionales, las contribuciones potenciales y los desafíos de implementación de la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática.

3. Identificar las complementariedades y los puntos de coordinación entre los tres modelos y evaluar las condiciones bajo las cuales pueden funcionar como un marco económico coherente, en lugar de como reformas aisladas.

4. Traducir el marco integrado en mecanismos institucionales, organizativos y de políticas públicas capaces de sustentar una transición orientada a la equidad social, la sostenibilidad ambiental, la participación democrática y la eficiencia económica.

CONTRIBUCIÓN

La contribución de este estudio es principalmente analítica e integradora. En lugar de tratar la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática como alternativas independientes, el estudio las organiza como dimensiones complementarias de un marco económico común. Dentro de ese marco, la economía solidaria aporta principios de cooperación, organización colectiva y equidad social; la economía circular y regenerativa aborda el uso de los recursos, la reducción de residuos y la restauración ecológica; y la economía democrática aporta propiedad participativa, gobernanza y toma de decisiones. Esta estructura proporciona una base para examinar cómo los tres enfoques pueden interactuar institucionalmente en lugar de funcionar como reformas aisladas.

Una segunda contribución consiste en trasladar el marco al plano institucional. El estudio vincula el marco integrado con los mecanismos institucionales y de políticas públicas desarrollados a lo largo del manu-

scrito, entre ellos las estructuras cooperativas y de empresas sociales, la intervención del sector público, la política fiscal progresiva, la transición hacia las energías renovables, la educación y la formación, las finanzas éticas y la gobernanza participativa. El estudio no afirma que cada componente sea novedoso por separado; su contribución radica en sistematizar su interdependencia e identificar los mecanismos mediante los cuales pueden coordinarse dentro de un marco de transición.

METODOLOGÍA

Este estudio adopta un enfoque analítico cualitativo, documental y comparativo. Se basa en la literatura académica, informes institucionales, análisis históricos e indicadores cuantitativos citados a lo largo del manuscrito para examinar las tensiones sociales, económicas, políticas y ambientales asociadas con el capitalismo contemporáneo y evaluar los principios institucionales de la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática. La evidencia cuantitativa se utiliza de forma descriptiva para contextualizar patrones de desigualdad, pobreza, precariedad

laboral, financiarización, concentración del poder y degradación ambiental, y no para realizar una estimación causal econométrica.

El análisis se desarrolla en cuatro etapas. En primer lugar, identifica los problemas estructurales recurrentes que la literatura y la evidencia revisadas atribuyen a la organización capitalista contemporánea. En segundo lugar, examina por separado los tres modelos económicos alternativos, centrándose en sus principios, formas organizativas, beneficios potenciales y desafíos de implementación. En tercer lugar, compara los modelos para identificar complementariedades y puntos de coordinación capaces de sustentar un marco integrado. En cuarto lugar, traduce ese marco en mecanismos institucionales, organizativos y de políticas públicas para la transición económica. El capítulo sobre el capitalismo estadounidense funciona como un estudio de caso mediante el cual se examina el diagnóstico más amplio en un contexto nacional específico; no se lo considera una representación universal de todas las economías capitalistas.

ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio tiene un alcance temático e institucional. Examina las tensiones sociales, económicas, políticas y ambientales analizadas en el manuscrito en relación con el capitalismo contemporáneo y evalúa tres conjuntos de prácticas y teorías económicas —la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática— como componentes potencialmente complementarios de una alternativa integrada. El análisis se concentra en la relación entre estos modelos, los principios institucionales que los distinguen y los mecanismos de políticas públicas y organizativos mediante los cuales podría procurarse su coordinación.

En términos empíricos, el manuscrito utiliza a Estados Unidos como su principal caso nacional para examinar la desigualdad, la financiarización, las condiciones laborales, la concentración político-económica y las dinámicas institucionales relacionadas, al tiempo que recurre a indicadores, organizaciones y ejemplos internacionales adicionales tal como se presentan en el

texto. Por lo tanto, el estudio desarrolla un marco conceptual comparativo y una propuesta de transición, en lugar de una evaluación empírica país por país de todas las economías capitalistas o de todas las iniciativas solidarias, circulares, regenerativas y democráticas existentes.

LIMITACIONES

El estudio presenta varias limitaciones derivadas de su diseño analítico. Es principalmente cualitativo y documental, y los indicadores cuantitativos citados a lo largo del manuscrito se utilizan de manera descriptiva, en lugar de servir de base para una estimación econométrica o una prueba causal. En consecuencia, el estudio no pretende establecer que los mecanismos institucionales analizados producirán resultados idénticos en distintos países, sectores o contextos históricos. La evidencia se utiliza para identificar problemas recurrentes, ilustrar dinámicas institucionales y evaluar la compatibilidad conceptual de los modelos económicos alternativos examinados.

Una segunda limitación se refiere al estatus del marco integrado propuesto. La combinación de la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática se plantea como un marco de transición teórico y orientado a las políticas públicas, y no como un sistema económico ya implementado y validado empíricamente a escala nacional. El caso estadounidense ofrece una ilustración concentrada de varios de los problemas examinados en el estudio, pero no puede representar toda la diversidad institucional de las economías capitalistas. Del mismo modo, los ejemplos organizativos y de políticas públicas analizados en el manuscrito demuestran la existencia práctica de componentes individuales, pero no establecen por sí solos la viabilidad del modelo integrado completo. Por lo tanto, serían necesarias investigaciones comparativas y empíricas adicionales para poner a prueba su desempeño, adaptabilidad institucional y efectos a largo plazo bajo diferentes condiciones económicas y políticas.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

El estudio está organizado en cuatro bloques analíticos. El primero establece el diagnóstico del capitalismo contemporáneo mediante «Capitalismo en crisis» y el estudio de caso estadounidense, combinando la discusión histórica con evidencia descriptiva sobre desigualdad, precariedad laboral, financiarización, concentración político-económica y presiones ambientales. El segundo examina la economía solidaria, la economía circular y regenerativa y la economía democrática como cuerpos diferenciados de teoría y práctica, e identifica sus principios, formas institucionales, contribuciones potenciales y desafíos de implementación.

El tercer bloque desarrolla la propuesta integradora en «Los tres modelos combinados» y «Nuevo modelo económico», donde las complementariedades entre los tres enfoques se traducen en mecanismos organizativos y de políticas públicas. El bloque final, «Conclusiones», consolida el marco de transición y sus requisitos de implementación, al tiempo que preserva la distinción entre la propuesta conceptual del manuscrito y

la validación empírica que sería necesaria en investigaciones posteriores. Esta organización separa el diagnóstico y la evidencia del examen comparativo de las alternativas y de la propuesta económica integrada del estudio.

INTRODUCCIÓN

La economía solidaria se caracteriza como una economía socialmente responsable que busca generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, priorizando no solo los beneficios económicos, sino también la cooperación y la participación de los trabajadores, los consumidores y la comunidad en la gestión de las empresas mediante la propiedad colectiva o la toma participativa de decisiones. Esta forma de economía procura la justicia social, la igualdad y la equidad en la distribución de los recursos y los beneficios, al tiempo que fomenta el apoyo mutuo entre los actores económicos. También promueve las economías locales y el comercio justo, con el objetivo de cultivar una economía más justa y sostenible.

Por otra parte, la economía circular y regenerativa busca transformar los modelos actuales de producción y consumo mediante la promoción de la sostenibilidad ambiental y la reducción de residuos y emisiones. La

economía circular se centra en promover la reutilización y el reciclaje de materiales y productos, así como en minimizar la extracción de recursos naturales y la generación de residuos. La economía regenerativa, por su parte, promueve la regeneración de los ecosistemas y la biodiversidad mediante la restauración de los suelos, el fomento de la agricultura orgánica y la reducción de la contaminación y la deforestación. Por último, la economía democrática procura fomentar la participación de todos los actores económicos en los procesos de toma de decisiones, junto con la propiedad y el control democráticos de los medios de producción. La economía democrática busca promover la justicia social y la equidad en la distribución de los recursos y los beneficios, al tiempo que impulsa la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones.

En síntesis, la propuesta de una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática parece constituir una alternativa necesaria y práctica para abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad. En los capítulos sigu-

ientes exploraremos en detalle cada uno de estos aspectos y analizaremos los desafíos y las oportunidades asociados con la implementación de esta propuesta.

El concepto de una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática constituye una respuesta a los problemas y desafíos planteados por el sistema económico actual. Se basa en la idea de que la economía debe estar al servicio del bienestar colectivo, en lugar de perseguir únicamente el beneficio. En primer lugar, la economía solidaria se centra en la justicia social, la igualdad y la equidad en la distribución de los recursos y los beneficios, promoviendo la solidaridad entre los actores económicos. Para lograrlo, aboga por la cooperación y la participación de los trabajadores, los consumidores y la comunidad en la gestión empresarial mediante la propiedad colectiva o la toma participativa de decisiones. Asimismo, busca estimular las economías locales y el comercio justo, fomentando un sistema económico más justo y sostenible. Esto implica apoyar la producción local y a las comunidades

vulnerables, al tiempo que se reduce la dependencia de las grandes corporaciones y de las economías globales.

Asimismo, la economía circular y regenerativa transforma los modelos actuales de producción y consumo, haciendo hincapié en la sostenibilidad ambiental y en la reducción de residuos y emisiones. Prioriza la reutilización y el reciclaje de materiales y productos, así como la minimización de la extracción de recursos naturales y de la generación de residuos. Por su parte, la economía regenerativa busca restaurar los ecosistemas y la biodiversidad mediante la reducción de la contaminación y la deforestación y el fomento de la agricultura orgánica y la restauración de los suelos.

Para concluir, la economía democrática promueve la participación de todos los actores económicos en los procesos de toma de decisiones, así como la propiedad y el control democráticos de los medios de producción. Esto implica fomentar la participación ciudadana y la toma colectiva de decisiones, al tiempo que se avanza hacia una sociedad más justa y equitativa.

La nueva teoría económica que propongo se basa en la idea de una economía justa que busca reducir la desigualdad y promover el bienestar de todas las personas, no solo de una élite privilegiada. Esta economía se sustenta en tres pilares fundamentales: la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la eficiencia económica.

En lo que respecta a la sostenibilidad ambiental, es fundamental entender la economía como un sistema interconectado con el medio ambiente y considerar su impacto en el ecosistema circundante. Esto implica que las empresas y las personas deben asumir la responsabilidad por sus acciones y adoptar medidas para minimizar su huella ecológica. Las prácticas sostenibles, como la reducción de residuos, el uso de recursos renovables y la promoción de modelos de economía circular, desempeñan un papel clave para alcanzar la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la justicia social, es esencial que la economía no solo sea eficiente, sino también justa. Esto implica garantizar una distribución más equitativa de

la riqueza y los recursos. Puede implementarse un sistema tributario progresivo para redistribuir la riqueza y financiar programas sociales que aborden la desigualdad y mejoren la calidad de vida de las personas con menores ingresos. Asimismo, promover la igualdad de oportunidades en la educación, la atención sanitaria y el acceso a recursos básicos contribuye a crear una sociedad más justa.

La eficiencia económica constituye otro aspecto importante de una economía justa. Aunque la productividad y la competitividad son deseables, no deben alcanzarse a costa de la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Encontrar formas innovadoras y sostenibles de producción y consumo, así como apoyar el emprendimiento y la creación de empleo en sectores que prioricen la calidad y el bienestar, puede contribuir a una economía más eficiente y equilibrada.

La integración de estos tres pilares —sostenibilidad ambiental, justicia social y eficiencia económica— es esencial para una nueva economía justa. Al adoptar este enfoque integral, podemos abordar los desafíos de

la desigualdad, la degradación ambiental y la inestabilidad económica. Esta visión integral no solo beneficia a las generaciones actuales, sino que también garantiza un futuro sostenible y justo para las generaciones venideras.

Economía solidaria: se propone la economía solidaria como una alternativa al modelo económico tradicional. Apoya la creación y el fortalecimiento de cooperativas y empresas sociales que promuevan el desarrollo local y sostenible, generen empleos dignos y fomenten la participación democrática en la gestión de las empresas. Al priorizar valores como la cooperación, la justicia social y el empoderamiento comunitario, la economía solidaria busca abordar las deficiencias del sistema capitalista orientado por el afán de lucro.

Transición hacia las energías renovables: para garantizar un futuro sostenible, se propone una transición hacia las energías renovables, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la generación y el consumo de fuentes de energía limpias y renovables. Esto no solo beneficia al medio ambiente

al mitigar el cambio climático y reducir la contaminación, sino que también genera oportunidades económicas al impulsar el crecimiento del sector de las energías renovables. Las inversiones en infraestructura e investigación en energías renovables pueden crear nuevos empleos y estimular la innovación, al tiempo que contribuyen al objetivo global de descarbonización.

Promoción de la educación y la formación: la educación y la formación desempeñan un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la garantía del desarrollo económico y social. Se hace especial hincapié en invertir en educación y formación para todas las personas, con independencia de su origen socioeconómico. Este enfoque busca promover la igualdad de oportunidades, mejorar las habilidades y competencias y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Al dotar a las personas de los conocimientos y las capacidades necesarios, quedan mejor preparadas para adaptarse a contextos económicos cambiantes y contribuir a una sociedad más próspera.

Fortalecimiento del sector público: se propone fortalecer el sector público como una medida clave para la gestión y el control de la economía. El objetivo es reducir la influencia del sector privado sobre la política económica y aumentar el control democrático de la ciudadanía sobre la toma de decisiones económicas. Al fortalecer las instituciones públicas y los mecanismos de gobernanza, puede lograrse una mayor rendición de cuentas, transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades e intereses de la sociedad.

En síntesis, la nueva teoría de la economía justa propone un cambio radical respecto del modelo económico actual, centrado en la redistribución de la riqueza, la promoción de la economía solidaria, la transición hacia las energías renovables, el fomento de la educación y la formación y el fortalecimiento del sector público. Estos cambios tienen el potencial de reducir la desigualdad económica y la pobreza, al tiempo que crean un futuro más sostenible y justo.

CAPITALISMO EN CRISIS

Históricamente, el capitalismo ha sido criticado por su capacidad para generar desigualdades económicas y sociales. Desde su surgimiento, se lo ha asociado con la explotación de los trabajadores y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Esta acumulación de riqueza ha ampliado la brecha entre ricos y pobres y se ha convertido en uno de los principales factores de la desigualdad social. Asimismo, el capitalismo ha sido objeto de críticas por su impacto sobre la naturaleza y el medio ambiente. La búsqueda incesante del crecimiento económico y de beneficios ha dado lugar a la explotación excesiva de los recursos naturales, la degradación ambiental y el cambio climático. A medida que la economía mundial continúa expandiéndose, aumenta la presión sobre los recursos naturales y la crisis ambiental adquiere una urgencia cada vez mayor.

Desde el punto de vista geográfico, el capitalismo también ha dado lugar a importantes disparidades entre países ricos y pobres. Las naciones ricas han podido explotar los recursos y la fuerza de trabajo de los países más pobres, a menudo mediante prácticas comerciales injustas y el endeudamiento. Esto ha generado una brecha creciente entre países ricos y pobres, contribuyendo a perpetuar la pobreza y la exclusión social en todo el mundo. En el plano social, el capitalismo también ha sido criticado por su impacto en la calidad de vida de las personas. La cultura del consumo y la adquisición de bienes se han convertido en aspectos fundamentales de la vida moderna. Sin embargo, esta cultura del consumo suele provocar una insatisfacción permanente y una falta de felicidad genuina, ya que las personas persiguen la acumulación material en lugar de buscar un bienestar y una realización duraderos.

Además, en el plano económico, el capitalismo ha generado una serie de desafíos. La búsqueda incesante del crecimiento y de beneficios ha dado lugar a una competencia despiadada y a la concentración del poder

en manos de unas pocas corporaciones y personas. Esto ha provocado una falta de competencia genuina en muchos sectores, limitando la innovación y la creatividad dentro de la economía mundial. La desigualdad económica constituye también un problema fundamental del capitalismo contemporáneo. Según el informe de Oxfam «Public Good or Private Wealth», en 2020, la riqueza combinada de las diez personas más ricas del mundo superó la de todos los gobiernos del mundo en conjunto. Entretanto, según el Banco Mundial, más del 10 % de la población mundial vive en situación de pobreza extrema, definida como vivir con menos de 1,90 dólares al día. La desigualdad económica tiene efectos perjudiciales sobre la salud, la educación y el bienestar de las personas y puede contribuir a la polarización política y social.

En lo que respecta a las cuestiones geográficas, el capitalismo ha conducido a la explotación de recursos naturales y humanos en los países en desarrollo, particularmente en África, Asia y América Latina. Las corporaciones multinacionales suelen extraer materias pri-

mas y mano de obra barata de estos países, pero rara vez reinvierten en ellos. Esto ha provocado degradación ambiental y pobreza en muchas naciones, mientras que los países ricos se benefician de esos recursos y de esa mano de obra barata.

«Se ha sostenido que el capitalismo siempre ha generado desigualdades, ya sea mediante la explotación de los trabajadores, la expropiación de los recursos naturales o la dominación de los países periféricos. Sin embargo, estas desigualdades no son inevitables, sino el resultado de una serie de decisiones políticas y económicas que han favorecido a las élites mientras marginaban a la mayoría» (Piketty, 2014).

Los problemas sociales del capitalismo abarcan la alienación del trabajo, la pérdida de identidad cultural y la fragmentación de las comunidades. El trabajo se considera un medio para generar beneficios en lugar de

una actividad significativa y satisfactoria. Asimismo, la globalización y la homogeneización cultural, a menudo asociadas con el capitalismo, pueden erosionar las tradiciones y culturas locales, provocando la pérdida de identidad cultural y la fragmentación de las comunidades. En síntesis, el capitalismo contemporáneo presenta una serie de problemas históricos, geográficos, sociales y económicos que plantean importantes desafíos para la sostenibilidad, la justicia y el bienestar humano. En el capítulo siguiente exploraremos cómo una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática podría ofrecer una alternativa más justa, sostenible e inclusiva al sistema económico actual.

«La historia del capitalismo es una historia de lucha de clases, en la que los trabajadores han procurado resistir la explotación y la opresión del capital. A lo largo de los siglos, han surgido movimientos obreros, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales para construir alternativas al capital-

ismo y defender los derechos de los trabajadores» (Marx y Engels, 1848).

Como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista geográfico el capitalismo también ha generado desigualdades globales, en las que los países ricos y desarrollados explotan los recursos y la mano de obra de las naciones pobres y subdesarrolladas. La globalización económica y la liberalización del comercio han permitido la libre circulación de capitales y mercancías, pero también han provocado un aumento de la competencia y la explotación, especialmente en los países en desarrollo que luchan por atraer inversión extranjera y exportar sus productos. En el plano social, el capitalismo ha producido profundas desigualdades económicas, que han dado lugar a la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite, mientras muchos trabajadores luchan por sobrevivir con salarios bajos e inseguridad laboral. El acceso limitado a servicios básicos como la atención sanitaria y la educación ha agravado aún más las desigualdades sociales y económicas. En

el plano económico, el capitalismo ha demostrado ser inestable y propenso a las crisis económicas, como la Gran Depresión de la década de 1930 y la crisis financiera mundial de 2008. El afán de maximizar los beneficios dentro del capitalismo fomenta la especulación financiera y la falta de regulación, agravando las crisis económicas y aumentando la desigualdad económica. El aumento de la riqueza y del poder económico de las grandes corporaciones y las élites financieras conduce a una mayor concentración de la riqueza y los recursos en manos de unos pocos, mientras la mayor parte de la población lucha por llegar a fin de mes con salarios bajos y en condiciones precarias.

Este sistema también degrada el medio ambiente y explota los recursos naturales. La lógica del capitalismo se centra en maximizar los beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los efectos a largo plazo sobre el medio ambiente y las comunidades afectadas. La explotación de los recursos naturales, la contaminación y la degradación ambiental son algunas de las consecuencias negativas de este enfoque. Según el informe

de Oxfam de 2021 «Reward Work, Not Wealth», el 1 % más rico de la población mundial posee más del doble de la riqueza del 6,9 % más pobre. Esta desigualdad económica se ha intensificado en las últimas décadas, en gran medida debido a la creciente concentración de la riqueza en manos de una élite empresarial y financiera.

«El capitalismo ha generado una enorme concentración de riqueza y poder en manos de unas pocas corporaciones y élites económicas, creando enormes desigualdades económicas y políticas. Las corporaciones pueden ejercer su poder para influir en las políticas públicas y las regulaciones, favoreciendo a menudo sus intereses a costa de la mayoría de la población» (Harvey, 2010).

Según el informe de las Naciones Unidas de 2019 sobre biodiversidad, un millón de especies animales y

vegetales están en riesgo de extinción debido a la actividad humana, lo que tiene consecuencias negativas para la estabilidad climática y la seguridad alimentaria.

El empleo precario y la falta de derechos laborales son también problemas asociados con el capitalismo contemporáneo. Muchos trabajadores se enfrentan a empleos mal remunerados, inseguridad laboral y falta de protección social, factores que repercuten negativamente en su calidad de vida y bienestar económico.

«El capitalismo no surgió de la nada en el siglo XVIII, sino que se construyó sobre las contradicciones y tensiones del feudalismo tardío y el mercantilismo. La acumulación primitiva, la explotación de los recursos coloniales y la revolución industrial fueron los procesos que dieron origen a la dominación capitalista» (Harvey, 2003).

Del mismo modo, existe una creciente mercantilización de la vida, en la que las relaciones sociales y

culturales se han convertido en objetos de intercambio y quedan subordinadas a la lógica del mercado. Esto ha dado lugar a una cultura del individualismo y el consumismo, en la que el valor de las personas se mide por su capacidad para consumir y producir.

Desde sus orígenes en el siglo XVIII, el capitalismo ha sido criticado por sus efectos sobre la desigualdad. El economista y filósofo alemán Karl Marx sostenía que el capitalismo era un sistema que inevitablemente producía una brecha cada vez mayor entre la clase capitalista y la clase trabajadora, lo que finalmente conduciría a una revolución social. La teoría de Marx fue complementada por otros críticos del capitalismo, como el economista británico John A. Hobson, quien sostenía que el capitalismo fomentaba la desigualdad económica mediante la concentración del capital en manos de una pequeña élite y la explotación de los trabajadores. La historia ha demostrado que estas preocupaciones estaban bien fundadas. En el siglo XIX, la Revolución Industrial trajo consigo la explotación de los trabajadores en fábricas, minas y otras industrias.

Los trabajadores se veían obligados a cumplir largas jornadas en condiciones peligrosas y a menudo recibían salarios bajos. Entretanto, los propietarios de las empresas acumulaban enormes fortunas. A lo largo del siglo XX, el capitalismo evolucionó y se intentó mitigar sus efectos más perjudiciales. Se formaron sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores, los gobiernos establecieron normas laborales y de seguridad y se crearon sistemas de bienestar social para brindar protección a los más vulnerables. No obstante, la desigualdad sigue siendo hoy un problema fundamental. Además, la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades existentes y ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas económicos actuales.

Según el Banco Mundial, en 2021, la pobreza extrema afectaba en todo el mundo al 9,2 % de la población, alrededor de 706 millones de personas. Del mismo modo, la desigualdad económica sigue siendo un problema importante a escala mundial: el 1 % más rico de la población mundial posee más del doble de

la riqueza del 6,9 % más pobre, según el informe de Oxfam de 2022. En países como Estados Unidos, la brecha de riqueza entre ricos y pobres se ha ampliado en las últimas décadas: en 1980, el 1 % más rico poseía el 10 % de la riqueza total del país, mientras que en 2021 poseía el 15 %. Al mismo tiempo, el 50 % más pobre de la población posee solo el 2 % de la riqueza total del país. En América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 30,5 % de la población vivía en la pobreza en 2020, lo que representaba más de 185 millones de personas. Entretanto, el 10,7 % de la población (alrededor de sesenta y cinco millones de personas) vivía en situación de pobreza extrema. En la región, la desigualdad también constituye un problema importante: el 1 % más rico de la población posee el 25 % de la riqueza total, mientras que el 50 % más pobre posee solo el 3,5 %. Según el informe de la CEPAL «Social Panorama of Latin America 2021», la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo sobre la pobreza y la desigualdad en la región. En 2020, la tasa de pobreza extrema en

América Latina y el Caribe aumentó del 11,3 % al 12,5 %, lo que significa que veintidós millones de personas adicionales cayeron en la pobreza extrema. Además, la tasa de pobreza aumentó del 30,5 % al 33,7 %, equivalente a un incremento de veintidós millones de personas. El informe también destaca que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de manifiesto y agravado desigualdades estructurales en la región, como la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación racial y de género y la concentración de la riqueza en un pequeño porcentaje de la población.

El capitalismo contemporáneo plantea una serie de problemas para los trabajadores de todo el mundo. Uno de los principales es la precariedad laboral, lo que significa que un número cada vez mayor de trabajadores ocupa puestos temporales, de tiempo parcial o por contrato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2021, más del 60 % de la fuerza laboral

mundial se encontraba en el empleo informal, sin protección laboral, seguridad social ni derechos laborales básicos. Otro problema es la creciente automatización y digitalización de la economía, que conduce a la eliminación de muchos empleos tradicionales y a la creación de nuevos puestos precarios y mal remunerados. Además, la automatización también ha agravado la desigualdad en el mercado laboral, ya que los empleos mejor remunerados suelen requerir habilidades técnicas y educación avanzada. Los trabajadores también se enfrentan a una mayor competencia mundial, que ha provocado la deslocalización y el traslado de empleos a países con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Esto ha generado pérdidas de empleo en muchos países, especialmente en los sectores manufactureros, y una mayor presión sobre los trabajadores que permanecen para que acepten salarios más bajos y peores condiciones laborales. Por último, los trabajadores también se enfrentan a una falta de representación sindical y a la erosión de los derechos laborales. Muchos países han reducido las protecciones laborales y

debilitado a los sindicatos y la negociación colectiva, aumentando aún más la vulnerabilidad de los trabajadores frente a los empleadores.

Estos datos reflejan con claridad la magnitud de los problemas de desigualdad y pobreza en todo el mundo y su conexión con el sistema económico actual: el capitalismo. El capitalismo contemporáneo se caracteriza por la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos, mientras la mayoría de las personas quedan marginadas y luchan por sobrevivir. Esto se debe en gran medida a la búsqueda de la maximización de beneficios y de la acumulación de capital por parte de empresas y particulares, lo que conduce a la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales y a la exclusión de los más pobres y vulnerables. Esta situación es insostenible y debe abordarse de manera urgente y decidida. Es necesario replantear el sistema económico y buscar alternativas más justas y sostenibles que tengan en cuenta las necesidades de todas las personas y del planeta.

Una nueva economía justa podría ser una solución, basada en la colaboración, la solidaridad y el bien común, en lugar de la maximización de los beneficios individuales. Esto podría lograrse mediante políticas y medidas concretas, como la regulación y redistribución de la riqueza, el aumento de los salarios y la protección de los derechos laborales, la promoción de las economías locales y circulares y la inversión en servicios públicos como la educación y la atención sanitaria. En esencia, la desigualdad y la pobreza son problemas globales que requieren soluciones globales y sistémicas. Debemos mirar más allá del sistema económico actual y trabajar juntos para construir una economía más justa y sostenible que promueva el bienestar de todas las personas y del planeta. La nueva economía justa puede ser un primer paso en esa dirección.

En cuanto a la desigualdad de género, según el Foro Económico Mundial, la brecha de género en materia de salud y supervivencia, educación, participación económica y empoderamiento político no se cerrará hasta dentro de otros 135,6 años. Además, la pandemia

de COVID-19 ha agravado la desigualdad de género, ya que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pérdida de empleos y el aumento de la carga de trabajo no remunerado en el hogar. La desigualdad de género en el ámbito laboral se refleja en varios indicadores cuantitativos preocupantes. Por ejemplo, según un informe de la OIT de 2020, la brecha salarial mundial de género se sitúa en el 16 %, lo que significa que las mujeres ganan un 16 % menos que los hombres por el mismo trabajo. Asimismo, se estima que 740 millones de mujeres en todo el mundo se encuentran en empleos informales con salarios bajos y una protección laboral insuficiente.

En el ámbito ambiental, el capitalismo del siglo XXI ha conducido a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la degradación del medio ambiente. Según el informe de 2018 del IPCC, se estima que, si la temperatura mundial aumenta más de 1,5 °C, habrá efectos irreversibles sobre los ecosistemas terrestres y marinos, la biodiversidad y los sistemas humanos. Asimismo, según el informe de 2018 de la OMS, la

contaminación del aire provoca siete millones de muertes al año en todo el mundo.

Estos datos muestran con claridad que la desigualdad y la pobreza son problemas graves y persistentes en todo el mundo y que se necesitan soluciones eficaces y sostenibles para abordarlos de forma sustantiva.

ESTUDIO DE CASO: Capitalismo estadounidense: análisis de la desigualdad y la dinámica económica

El capitalismo estadounidense es uno de los sistemas económicos más destacados del mundo, caracterizado por principios como la «propiedad privada, la libre empresa y el libre mercado» (Stiglitz, 2018). Este sistema funciona sobre la base de que «los precios de los bienes y servicios están determinados por la oferta y la demanda» (Stiglitz, 2018). Si bien el capitalismo estadounidense ha desempeñado un papel fundamental en la economía mundial, ha sido objeto de críticas debido a su énfasis en la «maximización de los beneficios y la desigualdad económica» (Stiglitz, 2018).

Las empresas que operan dentro del marco capitalista estadounidense gozan de libertad para producir y

vender bienes y servicios «sin una interferencia indebida del gobierno» (Stiglitz, 2018). Sin embargo, deben cumplir las «regulaciones gubernamentales y las leyes laborales» (Stiglitz, 2018). Los empresarios tienen la posibilidad de invertir en empresas, motivados por la expectativa de obtener beneficios y de «asumir riesgos financieros a cambio de rendimientos potencialmente mayores» (Stiglitz, 2018). Los consumidores, por su parte, tienen libertad para ejercer sus preferencias mediante la compra y el consumo de los productos de su elección. En el ámbito laboral, los trabajadores tienen libertad para elegir a sus empleadores y sus lugares de trabajo (Stiglitz, 2018).

No obstante, la búsqueda de beneficios suele generar determinadas consecuencias negativas dentro del sistema capitalista estadounidense. Una de ellas es la explotación de los trabajadores y la profundización de la desigualdad económica. Los empleadores suelen procurar reducir los costos laborales, lo que se traduce en «salarios bajos y malas condiciones de trabajo» (Stiglitz, 2018). Asimismo, las empresas pueden recur-

rir a la externalización del trabajo hacia países con salarios más bajos, contribuyendo así a la pérdida de empleos para los trabajadores estadounidenses (Stiglitz, 2018).

Además, la falta de regulaciones adecuadas dentro del capitalismo estadounidense ha generado preocupaciones ambientales. Una supervisión insuficiente ha provocado casos de «contaminación y degradación ambiental» (Stiglitz, 2018). Las consecuencias de estas acciones tienen implicaciones de gran alcance para el medio ambiente y las generaciones futuras.

Desde una perspectiva histórica, los desafíos económicos y sociales afrontados durante la Gran Depresión fueron más graves que los que se experimentan en la actualidad. Sin embargo, durante aquel período predominaba en la sociedad un sentimiento de esperanza que alimentaba las expectativas de mejora (Stiglitz, 2018). En la actualidad, el nivel de desigualdad no tiene precedentes, y la desigualdad general se asemeja a la de algunos de los períodos más oscuros de la historia. La extrema concentración de la riqueza en

una fracción diminuta de la población, inferior al 1 %, desempeña un papel importante en el agravamiento de esta desigualdad (Stiglitz, 2018).

El análisis de los datos revela una ampliación sustancial de la brecha de riqueza entre ricos y pobres en las últimas décadas. Según el Pew Research Center, la proporción de adultos estadounidenses que vivían en hogares de ingresos medios descendió del 61 % en 1971 al 50 % en 2015, mientras que la proporción de quienes vivían en hogares de ingresos altos aumentó del 14 % al 21 % durante el mismo período (Pew Research Center, 2015). Además, desde la década de 1970, el crecimiento de los ingresos de los hogares situados en las zonas media e inferior de la distribución ha sido sustancialmente más lento que el crecimiento de los ingresos en la parte superior (Center on Budget and Policy Priorities, 2018).

En síntesis, el capitalismo estadounidense es un sistema económico destacado, impulsado por principios como la propiedad privada, la libre empresa y el libre mercado. Si bien ha contribuido al crecimiento

económico mundial, ha sido criticado por su énfasis en la maximización de los beneficios y la desigualdad económica. La explotación de los trabajadores, la externalización, las regulaciones inadecuadas y la degradación ambiental se encuentran entre las preocupaciones asociadas. Al mismo tiempo, el nivel de desigualdad observado en la actualidad no tiene precedentes, y la extrema concentración de la riqueza agrava la disparidad entre ricos y pobres. Los datos estadísticos respaldan esta observación y muestran una ampliación significativa de la brecha de riqueza durante las últimas décadas.

En lo que respecta a la pobreza, los datos muestran que la tasa de pobreza en Estados Unidos sigue siendo elevada en comparación con la de otros países desarrollados. Según los datos de 2019 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 10,5 % de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza (Semega et al., 2020). Además, la pobreza afecta de manera desproporcionada a determinados grupos, como las personas de color, los niños y los adultos mayores. Los

datos respaldan la idea de que la pobreza en Estados Unidos afecta de forma desigual a distintos grupos. Por ejemplo, en 2019 la tasa de pobreza entre los afroamericanos fue del 18,8 %, mientras que entre los blancos no hispanos fue del 7,3 % (Semega et al., 2020). Del mismo modo, la tasa de pobreza de las personas menores de 18 años fue del 14,4 %, y la de quienes tenían 65 años o más fue del 8,9 % (Semega et al., 2020). Es importante señalar que, aunque la tasa de pobreza ha disminuido durante las últimas décadas, todavía hay millones de personas que viven en la pobreza y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y atención sanitaria. Además, la pandemia de COVID-19 agravó aún más la pobreza en el país, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Otra crítica al capitalismo estadounidense gira en torno a la falta de movilidad social. Según un estudio del Foro Económico Mundial, Estados Unidos ocupa el puesto 27 de 82 economías en materia de movilidad social intergeneracional, lo que indica que la probabilidad de que un niño nacido en una familia de bajos in-

gresos alcance un nivel de ingresos más elevado es mucho menor que en otros países (World Economic Forum, 2020). La falta de movilidad social ha recibido críticas de numerosos economistas y expertos en políticas públicas. Entre los factores que contribuyen a ella se encuentran la desigualdad de ingresos, el acceso limitado a la educación y la discriminación racial y de género. La desigualdad de ingresos desempeña un papel importante en la falta de movilidad social. La brecha de riqueza se ha ampliado en las últimas décadas, lo que significa que las oportunidades económicas son más limitadas para quienes nacen en familias de bajos ingresos. Además, muchos empleos con salarios bajos no ofrecen prestaciones como seguro médico, lo que dificulta que las personas salgan de la pobreza. El acceso limitado a la educación también es un factor importante que contribuye a la falta de movilidad social. Las universidades privadas pueden ser costosas, lo que hace inaccesible la educación superior para muchas personas de bajos ingresos. Asimismo, las escuelas públicas de las zonas de bajos ingresos suelen disponer de recursos

limitados y pueden no ofrecer la misma calidad educativa que las escuelas de zonas más prósperas. La discriminación racial y de género también puede limitar la movilidad social. Los estudios han mostrado que las personas de color y las mujeres suelen encontrar barreras para acceder a oportunidades económicas y educativas, lo que dificulta la movilidad social. La discriminación en el lugar de trabajo también puede restringir las oportunidades profesionales de quienes pertenecen a grupos marginados. El estudio determinó que la tasa de movilidad social intergeneracional es del 55 %, lo que significa que solo el 55 % de los hijos de padres de bajos ingresos supera a sus progenitores en términos de ingresos (World Economic Forum, 2021). En comparación, la movilidad social en países como Canadá y Dinamarca se sitúa en el 76 % y el 75 %, respectivamente (World Economic Forum, 2021). El informe también muestra que el 62 % de los hombres y el 50 % de las mujeres de hogares de bajos ingresos siguen en el mismo quintil de ingresos en el que nacieron (World Economic Forum, 2021).

Las críticas al capitalismo estadounidense se extienden a cuestiones como las tasas de pobreza, la distribución desigual de la riqueza y la limitada movilidad social. Los datos revelan niveles persistentes de pobreza, en particular entre determinados grupos. Asimismo, Estados Unidos presenta dificultades en materia de movilidad social en comparación con otros países, y factores como la desigualdad de ingresos, el acceso limitado a la educación y la discriminación contribuyen a este problema.

Durante períodos como los «felices años veinte» y los «felices años noventa», la situación se desarrolló de una manera muy similar. La extrema desigualdad observada se deriva principalmente de la concentración de la riqueza en manos de una fracción minúscula de la población: la décima parte del 1 % que se encuentra en la cúspide. Esta desigualdad extrema no solo es intrínsecamente injusta, sino que además tiene consecuencias sumamente negativas para la sociedad. De hecho, la mera existencia de semejante desigualdad ejerce un efecto corrosivo y perjudicial sobre la democracia.

Si examinamos la noción del «sueño americano», una parte integral de ella es la movilidad social: nacer en la pobreza, trabajar duro y alcanzar la riqueza. Antes era posible que un trabajador consiguiera un empleo digno, comprara una casa y pudiera pagar un automóvil para llevar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, todas esas aspiraciones se han derrumbado. En Estados Unidos, la democracia ha sido un valor fundamental y se ha promovido como una de las principales virtudes políticas y sociales del país. No obstante, a lo largo de la historia nacional han surgido tensiones y conflictos entre la democracia y las élites económicas y políticas. La concentración de la riqueza y el poder ha sido una preocupación recurrente dentro del sistema político y económico estadounidense.

Las políticas que favorecen a los ricos y poderosos han sido una constante a lo largo de la historia de Estados Unidos, lo que ha repercutido en la calidad y la naturaleza de la democracia del país. Los sectores privilegiados y poderosos han ejercido una influencia desproporcionada sobre la política y el gobierno, dando lugar

a una serie de problemas, entre ellos la limitada movilidad social, la ampliación de las brechas de riqueza y la persistencia de la pobreza. Además, el costo de las elecciones se ha disparado en las últimas décadas, lo que se ha traducido en un mayor control político por parte de las grandes corporaciones y de los ricos. Las elecciones requieren cantidades sustanciales de dinero, y quienes disponen de mayores recursos financieros ejercen una influencia desproporcionada sobre el proceso político y los resultados electorales. En el ámbito de la financiación de las campañas políticas, las elecciones presidenciales de 2020 registraron gastos superiores a los 14.000 millones de dólares, un aumento considerable frente a los aproximadamente 6.500 millones gastados en las elecciones presidenciales de 2016. Además, el 80 % de ese dinero procedió de donantes multimillonarios y grupos de interés. Esta realidad sugiere que los intereses de los ricos y poderosos ejercen una influencia desproporcionada sobre el proceso político y la toma de decisiones. Los partidos políticos han quedado entrelazados con las grandes corporaciones, lo que con-

duce a un poder político vaciado de contenido que se traduce rápidamente en legislación que concentra aún más la riqueza en los sectores más poderosos. Así, las políticas fiscales, las regulaciones, las normas de gobierno corporativo y una variedad de otras medidas políticas están diseñadas para aumentar la concentración de la riqueza y el poder. Este círculo vicioso se perpetúa a sí mismo, y no se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, Adam Smith lo describió en 1776 en su célebre libro «The Wealth of Nations». La obra de Smith nos dice que, en Inglaterra, los principales arquitectos de las políticas eran los propietarios de la sociedad, en aquel momento los comerciantes y fabricantes. Se aseguraban de que sus propios intereses estuvieran debidamente atendidos, independientemente del grave impacto sobre la población de Inglaterra o sobre otras poblaciones. En la actualidad, ya no se trata únicamente de comerciantes y fabricantes; las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales ocupan el papel de lo que Adam Smith denominó los «amos de la humanidad». Siguen la máxima «todo para

nosotros y nada para los demás». Sin embargo, en ausencia de una reacción popular generalizada, eso es, en esencia, lo que cabe esperar. En efecto, las políticas fiscales y regulatorias, al igual que en otros países, han sido criticadas por su impacto sobre la concentración de la riqueza y el poder. Por ejemplo, la reducción de impuestos para las corporaciones y las personas de altos ingresos, así como la eliminación o el debilitamiento de regulaciones destinadas a proteger a los consumidores y el medio ambiente, han sido percibidos como políticas que favorecen a los más ricos y poderosos. Asimismo, las normas de gobierno corporativo han sido criticadas por permitir que los ejecutivos empresariales ejerzan una influencia considerable sobre la toma de decisiones y la distribución de los beneficios, en detrimento de los trabajadores y los accionistas minoritarios. La presencia de poderosos grupos de interés, como los grupos empresariales de presión y las grandes corporaciones, también ha sido señalada como un factor que influye en la formulación de políticas públicas al servicio de los intereses de estas élites económicas. En consecuencia,

estas políticas han contribuido a concentrar la riqueza y el poder en manos de las élites económicas y empresariales, permitiéndoles influir sobre políticas que mantienen y refuerzan su posición privilegiada en la sociedad.

A lo largo de la historia de Estados Unidos ha existido una lucha constante entre la presión desde abajo a favor de una mayor libertad y democracia y los esfuerzos de la élite por incrementar desde arriba el control y la dominación. Este conflicto se remonta a la fundación del país. James Madison, principal arquitecto de la Constitución, creía en la democracia como pocos en el mundo lo hacían en aquella época. Sin embargo, también consideraba que el sistema estadounidense debía diseñarse —y, de hecho, gracias a su iniciativa, fue diseñado— de modo que el poder permaneciera en manos de los más ricos, pues se los consideraba el grupo de hombres más responsable. Por ello, la estructura constitucional formal otorgó mayor poder al Senado. El conflicto entre las demandas populares de libertad y democracia y la búsqueda de control y dom-

inación por parte de las élites ha sido una constante en la historia de Estados Unidos. Desde la fundación del país, la lucha por la independencia de la Corona británica estuvo motivada en gran medida por la búsqueda de mayor libertad y democracia por parte de los colonos. Sin embargo, la estructura política y económica que surgió tras la independencia siguió dominada por una élite de terratenientes y comerciantes. Durante el siglo XIX, el país afrontó conflictos de gran importancia, como la Guerra Civil, en la que los estados del Sur lucharon por preservar el sistema de esclavitud que les proporcionaba control económico y político sobre la población negra. A pesar de la victoria del Norte en la Guerra Civil y de la abolición de la esclavitud, las luchas por la igualdad y la democracia de la población negra continuaron durante décadas, incluido el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. En el siglo XX, las luchas por la justicia social y la democracia continuaron a través del movimiento obrero, el sufragio femenino, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y otras minorías y, más re-

cientemente, los movimientos por la justicia racial y la igualdad de género. Sin embargo, a medida que la concentración de la riqueza y el poder se ha intensificado en las últimas décadas, se ha vuelto cada vez más difícil que las demandas populares de libertad y democracia tengan un efecto real sobre las políticas y la estructura del poder. Esto ha provocado un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, que a su vez han generado mayor frustración y alienación entre la población, con el potencial de producir nuevos conflictos y tensiones sociales.

«La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, ya sean las de uno, unos pocos o muchos, y sean hereditarias, autodesignadas, electivas o de cualquier otra índole, puede ser justamente considerada la definición misma de la tiranía».

Esta cita se refiere a la importancia de la separación de poderes y de impedir la acumulación del poder en las mismas manos, ya sean las de uno, unos pocos o muchos, y sea hereditario, autodesignado, elegido o de cualquier otra índole. Una concentración semejante del poder puede degradar la libertad individual del mismo modo que un gobierno absoluto.

Cabe señalar que, en tiempos de Madison, el Senado no era elegido, sino seleccionado por los individuos más ricos. Madison creía que la principal preocupación de la sociedad debía ser proteger a la minoría adinerada frente a la mayoría. Sostenía que, si la mayoría pobre tuviera libertad para votar, podría quitarles sus propiedades a los ricos. Madison consideraba que esto sería injusto y que, por lo tanto, el sistema constitucional debía diseñarse para impedir la democracia.

Este debate tiene una larga tradición que se remonta al primer tratado de Aristóteles sobre el sistema político, «Politics». Aristóteles afirma que la democracia es el mejor sistema, pero también reconoce que, si los atenienses establecieran una democracia, se organi-

zarían y quitarían propiedades a los ricos. Madison advirtió sobre este escenario.

Si observamos la historia de Estados Unidos, vemos una lucha constante entre estas dos tendencias. Por un lado existe una tendencia democratizadora impulsada principalmente por la población: una presión desde abajo. Esta lucha permanente atraviesa períodos de retroceso y de avance. Por ejemplo, la década de 1960 fue un período de importante democratización, en el que sectores de la población hasta entonces pasivos y apáticos se organizaron y se volvieron activos, ejerciendo presión en favor de sus demandas. Se implicaron cada vez más en el activismo y en la toma de decisiones, modificando la conciencia pública. Los grupos minoritarios se organizaron y afirmaron sus derechos, junto con movimientos por los derechos de las mujeres, la protección ambiental, la oposición a la agresión y la preocupación por el bienestar de los demás. Estas acciones civilizadoras provocaron un gran temor entre los dirigentes políticos, en particular entre quienes procedían de estratos socioeconómicos más acomodados.

La reacción ante estos efectos civilizadores de la década de 1960 —y la fuerza del contraataque— se hizo evidente en la década de 1970. Adoptó la forma de una enorme y bien coordinada ofensiva empresarial destinada a contrarrestar los esfuerzos igualitarios emprendidos durante la presidencia de Nixon. Esto puede observarse en diversos acontecimientos, como el célebre Memorando Powell enviado a la Cámara de Comercio, el mayor grupo de presión empresarial, por Louis Powell, quien posteriormente se convertiría en juez de la Corte Suprema. En el memorando, Powell advertía que el mundo empresarial estaba perdiendo el control sobre la sociedad y que era necesario hacer algo para contrarrestar esas fuerzas. Aunque lo presentaba como una defensa frente a fuerzas externas, en esencia constituía un llamado al mundo empresarial para que utilizara su control de los recursos y lanzara una gran ofensiva contra esta ola democratizadora. Este manifiesto de doce páginas es «importante porque, si no se lo considera el documento fundacional, es la declaración más condensada destinada a establecer el marco teórico y el dis-

ño político del actual asalto contra cualquier vestigio de vida pública democrática que no esté a su vez subordinado a la lógica del supuesto sistema de libre mercado», como escribió Henry A. Giroux.

Powell recomendó actuar en diversos ámbitos, desde ampliar el papel a largo plazo de la USCC (U.S. Chamber of Commerce), que «goza de una posición estratégica» y de amplio apoyo, hasta ejercer influencia sobre las universidades que «atacan el sistema (de libre mercado)» y producen estudiantes y profesionales que han perdido la confianza en él y buscan empleo «en centros de verdadera influencia», como «los nuevos medios de comunicación, especialmente la televisión», el gobierno, la política, el ámbito académico y los distintos niveles de la educación. Estos «intelectuales» terminan a veces empleados en organismos reguladores o departamentos gubernamentales con amplias facultades sobre un sistema empresarial en el que no creen. Powell recomendó que la USCC considerara la creación de un equipo de especialistas altamente cualificados en ciencias sociales que creyeran en el sistema

y cuya autoridad gozara de amplio respeto. También sugirió evaluar los libros de texto, especialmente en economía, ciencia política y sociología, para restablecer lo que consideraba el equilibrio esencial de la libertad académica. Asimismo, propuso asegurar la presencia de portavoces de la libre empresa en ámbitos universitarios dominados, según afirmaba, por comunistas que, de acuerdo con una lista del FBI, habían impartido más de cien conferencias en 1970, junto con «cientos de presentaciones de izquierdistas y liberales que expresan las opiniones señaladas anteriormente en este memorando». Powell continuó recomendando que la USCC aumentara su influencia en las escuelas de negocios, la educación secundaria y el público mediante un equipo de académicos eminentes, escritores y oradores que dirigieran tareas de investigación, análisis, redacción y comunicación. Contarían con el apoyo de un «equipo de apoyo» con acceso a periodistas. La televisión «debe mantenerse, al igual que los libros de texto, bajo vigilancia constante», incluso mediante el análisis diario de la cobertura informativa, que a

menudo contiene las críticas más insidiosas al sistema empresarial y erosiona gradualmente la «confianza en las empresas y la libre empresa». Esta vigilancia y las medidas correctivas, como las denuncias ante las autoridades reguladoras de los medios, también deberían extenderse a la radio y a otros órganos de prensa. Según Powell, el «claustro de académicos» de la USCC debía publicar en respuesta a sus colegas «liberales e izquierdistas». Estos intelectuales orgánicos al servicio del sistema de libre empresa, como los definiría Gramsci, debían recibir incentivos para publicar artículos «en un amplio espectro de revistas y periódicos», así como libros académicos, libros de bolsillo y folletos, inundando los quioscos de aeropuertos, farmacias y otros lugares con publicaciones destinadas a contrarrestar a quienes proponían desde la revolución hasta el erotismo del amor libre. Esta estrategia de dominar el espacio público, defender el sistema y producir una visión socialmente comprometida requiere financiación, que Powell recomienda incluir en los presupuestos anuales que las empresas destinan a public-

itar sus productos. Concluye que la «amenaza al sistema empresarial» es una «amenaza a la libertad individual» e insta a utilizar el poder de los veinte millones de accionistas estadounidenses, que pueden ser movilizados para apoyar un programa educativo y un programa de acción política. El «Memorando Powell» es probablemente el acta de nacimiento de la estrategia destinada a apropiarse del pensamiento y la imaginación del pueblo estadounidense y convertirlo a la utopía del neoliberalismo.

Controlar las principales palancas del Estado y las instituciones que gobiernan la sociedad constituye el elemento central de toda estrategia revolucionaria o contrarrevolucionaria. Ninguna revolución ni contrarrevolución ha perdurado sin este requisito. Y la contrarrevolución neoliberal, objeto de la discusión que sigue, no constituye una excepción. En el campo liberal ocurrió algo notablemente similar: el primer gran informe de la Comisión Trilateral se refirió a ello como «The Crisis of Democracy». La Comisión Trilateral está integrada por liberales internacionalistas, y su ori-

entación es clara, dado que muchos de sus miembros procedían de la administración Carter. También estaban alarmados por los movimientos democratizadores de la década de 1960 y consideraban necesaria una reacción porque creían que existía un exceso de democracia.

Aquellos sectores de la población que antes habían sido pasivos y obedientes —lo que solía denominarse grupos de intereses especiales— comenzaron a organizarse y a entrar en la arena política. Los grupos dominantes sostuvieron entonces que esto ejercía demasiada presión sobre el Estado y que este no podía hacer frente a todas esas demandas. Por lo tanto, esos grupos debían volver a la pasividad y ser despolitizados. Les preocupaba especialmente lo que estaba ocurriendo con los jóvenes: se estaban volviendo demasiado libres e independientes. Presentaron esto como un fracaso de las escuelas, las universidades y las iglesias, aquellas instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes. Si examinamos su estudio, hay un interés que nunca mencionan: la empresa privada. Y es lógico, porque no

representa un interés especial, sino el interés nacional. Por consiguiente, la empresa privada no tiene ningún problema: puede contratar grupos de presión, financiar campañas, nombrar ejecutivos y tomar decisiones. Eso está bien, porque son los otros grupos —los grupos de intereses especiales, la población en general— los que deben quedar subordinados. Esta respuesta ideológica fue una parte del contraataque, pero el esfuerzo mayor que avanzaba en paralelo consistía, sencillamente, en rediseñar la economía.

Desde la década de 1970 ha existido un esfuerzo coordinado por parte de los amos de la humanidad y los propietarios de la sociedad para transformar la economía de dos maneras fundamentales. La primera consistió en aumentar el papel de las instituciones financieras, como bancos, compañías de inversión, aseguradoras y otras similares. Para 2007, justo antes de la última crisis, las instituciones financieras ya representaban el 40 % de los beneficios empresariales, una proporción muy superior a la de cualquier período anterior. En la década de 1950 y durante muchos años de-

spués, la economía estadounidense se basaba principalmente en la producción interna. Era el principal centro industrial del mundo. Las instituciones financieras constituían una parte relativamente pequeña de la economía, y su función consistía en canalizar activos no utilizados, como los depósitos bancarios de los ahorradores, hacia actividades productivas. Se estableció un sistema regulatorio: los bancos estaban regulados y la banca comercial se mantenía separada de la banca de inversión para limitar las prácticas de inversión arriesgadas que podían afectar a las personas. Durante el período de regulación no hubo quiebras financieras. Sin embargo, a partir de la década de 1970 todo cambió, con un enorme aumento de los movimientos especulativos de capital. También se produjo un giro importante en el sector financiero, desde la banca tradicional hacia inversiones riesgosas, instrumentos financieros complejos y manipulación monetaria. De manera creciente, la actividad empresarial del país se alejó de la producción interna y las finanzas se convirtieron en el principal negocio de las grandes

áreas metropolitanas. Este cambio puede observarse incluso en la selección de los directivos empresariales. En las décadas de 1950 o 1960, el director de una gran corporación estadounidense probablemente era, por ejemplo, un ingeniero que había estudiado gestión industrial en el MIT. En la actualidad, en cambio, quienes ocupan puestos directivos y otros cargos superiores suelen ser graduados de escuelas de negocios que han aprendido diversas técnicas financieras, entre otras cosas. En la década de 1970, General Electric, por ejemplo, podía obtener más beneficios mediante operaciones financieras que produciendo bienes en Estados Unidos. En efecto, durante las décadas de 1970 y 1980 se produjo una transformación importante de la economía estadounidense, en la que muchas grandes corporaciones orientaron su atención hacia los servicios financieros y la especulación. En este contexto, General Electric (GE) fue una de las empresas que encabezó esta tendencia. Según un artículo de Forbes de 1989, GE se convirtió en una empresa «más interesada en manipular sus beneficios a corto plazo que en producir bi-

enes para el mercado mundial». En lugar de invertir en investigación y desarrollo de productos, GE y otras compañías comenzaron a concentrarse en el sector financiero, invirtiendo en acciones y otros activos de alto riesgo para obtener grandes beneficios a corto plazo. Como resultado, estas empresas se fueron desconectando cada vez más de la economía real y se preocuparon más por maximizar los beneficios de los accionistas que por crear empleos y estimular el crecimiento económico. Cabe señalar que General Electric es hoy, en esencia, una institución financiera, que genera la mitad de sus beneficios mediante complejas operaciones financieras. No está en absoluto claro que genere algún valor para la economía. Este fenómeno se conoce como financiarización de la economía. El segundo proceso es la externalización de la producción. Según el informe anual de General Electric de 2021, la compañía generó un total de 85.900 millones de dólares en ingresos durante el ejercicio fiscal de 2020. De esa cantidad, aproximadamente el 50 % procedió de sus divisiones financieras, incluida GE Capital, mien-

tras que el resto provino de sus divisiones de energía, aviación y atención sanitaria. En cuanto a los beneficios, el informe muestra que General Electric obtuvo unos ingresos netos de 5.200 millones de dólares en 2020.

El sistema comercial fue reconstruido con el objetivo explícito de enfrentar a los trabajadores entre sí a escala mundial, lo que condujo a una reducción de la proporción de los ingresos recibida por la clase trabajadora. Según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el salario semanal medio de los trabajadores no supervisores del sector privado en enero de 2022 fue de 962 dólares, un aumento del 4,6 % respecto de enero de 2021. Sin embargo, ajustado por inflación, el salario semanal medio real de los trabajadores no supervisores del sector privado en enero de 2022 era aproximadamente un 5 % inferior al de 1973. Esto sugiere que, aunque los salarios han aumentado en términos nominales, no han seguido el ritmo de la inflación y la productividad, lo que significa que la clase

trabajadora recibe una proporción menor de la riqueza generada por la economía.

Además, la competencia mundial ha provocado la deslocalización de empleos y la importación de productos manufacturados más baratos, afectando a algunos trabajadores estadounidenses que antes ocupaban empleos manufactureros bien remunerados. Esto ha golpeado especialmente a Estados Unidos, pero está ocurriendo en todo el mundo, lo que significa que los trabajadores estadounidenses compiten, por ejemplo, con trabajadores superexplotados en China. Para dar una idea de la disparidad, en 2001 el salario mínimo en Estados Unidos era de 5,15 dólares por hora, mientras que el salario mínimo en China rondaba los 0,40 dólares por hora. En la actualidad, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de 7,25 dólares por hora, mientras que en China el salario mínimo varía según la región, pero puede situarse alrededor de los 2 dólares por hora en algunas zonas urbanas. En general, los trabajadores en China ganan mucho menos que los trabajadores de Estados Unidos y de otros países desarrolla-

dos, lo que genera una competencia desigual en el mercado laboral mundial.

Los profesionales altamente remunerados están protegidos; no tienen que competir en absoluto con el resto del mundo y, por supuesto, el capital puede desplazarse libremente. Los trabajadores, en cambio, no pueden desplazarse libremente, mientras que el capital sí puede hacerlo. Pensadores clásicos como Adam Smith señalaron que la libre circulación del trabajo es la base de cualquier sistema de libre comercio y, sin embargo, los trabajadores permanecen en gran medida atrapados. Los ricos y privilegiados están protegidos, reciben reconocimiento y elogios, y las consecuencias son evidentes. Las políticas están diseñadas para aumentar la inseguridad. Alan Greenspan, al declarar ante el Congreso, explicó su éxito en la gestión económica mediante lo que denominó «aumento de la inseguridad de los trabajadores». Los límites al crecimiento salarial se han vuelto claros en los últimos años, pero, como señalé anteriormente, la inseguridad laboral desempeña un papel dominante en ello. Si se

mantiene a los trabajadores en una situación de inseguridad, se los mantiene bajo control, y no exigirán salarios dignos, condiciones de trabajo dignas ni el derecho a la libre asociación, es decir, el derecho a formar sindicatos.

Greenspan ha defendido políticas que reducen la seguridad laboral y aumentan la flexibilidad del mercado de trabajo. Por ejemplo, en un discurso pronunciado en 1997 ante el American Enterprise Institute, Greenspan afirmó: «Si queremos que nuestra economía crezca más rápido, debemos aumentar la inseguridad de los trabajadores». Esta posición se inscribe en la teoría económica de la flexibilidad laboral, que sostiene que reducir los derechos laborales y disminuir las barreras para contratar y despedir permite a las empresas ser más competitivas y promover el crecimiento económico. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por numerosos economistas y activistas laborales, quienes sostienen que la flexibilidad laboral beneficia a empleadores e inversores a expensas de los trabajadores y las comunidades locales. La eliminación de

derechos laborales y la reducción de las barreras para contratar y despedir pueden provocar mayor inseguridad laboral, salarios más bajos y una mayor polarización de la riqueza. Del mismo modo, la deslocalización de la producción hacia países con salarios más bajos también ha sido criticada por su impacto en la economía y la sociedad. Aunque puede proporcionar a las empresas una ventaja de costos, también puede tener consecuencias negativas, como la pérdida de empleos y la desindustrialización de las comunidades locales, la explotación de trabajadores en países en desarrollo y una contribución al cambio climático mediante el aumento del transporte y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos dos procesos, la financiarización y la deslocalización de la producción, han contribuido a un círculo vicioso de concentración de la riqueza y el poder, en el que los intereses de los ricos y poderosos se perpetúan a expensas de la mayoría de la población.

El sueño americano, como muchos ideales, era en parte simbólico, pero también en parte real. Las dé-

cadass de 1950 y 1960 constituyeron el período de mayor crecimiento económico de la historia estadounidense. Durante esta Edad de Oro, el crecimiento estuvo ampliamente compartido, lo que significa que la quinta parte más pobre del país prosperó al mismo ritmo que la quinta parte más rica. El gobierno aplicó medidas de bienestar social que mejoraron la vida de la mayoría de la población. Por ejemplo, un trabajador negro podía encontrar un empleo digno en una fábrica de automóviles, comprar una casa y un automóvil, enviar a sus hijos a la escuela, etcétera. Esto se aplicaba a todos los ámbitos de la vida.

Cuando Estados Unidos era principalmente un centro industrial, se preocupaba por sus consumidores internos. Era bien sabido que Henry Ford había aumentado los salarios de sus empleados para que pudieran permitirse comprar automóviles. Sin embargo, cuando observamos lo que los bancos denominan plutonomía internacional —un pequeño porcentaje de la población mundial que acumula una riqueza cada vez mayor—, sus integrantes ya no se preocupan por lo que

les ocurra a los consumidores estadounidenses, porque la mayoría de esos consumidores, de todos modos, no comprarán sus productos a gran escala. Sus prioridades son los beneficios trimestrales, incluso cuando se basan en la manipulación financiera, junto con salarios elevados, generosas bonificaciones, producción deslocalizada cuando sea necesario y producción orientada hacia las clases adineradas del país y sus equivalentes en el extranjero. Esta dinámica ha conducido a una situación en la que la economía mundial está cada vez más desconectada de la realidad de gran parte de la población, contribuyendo al aumento de la desigualdad económica y a la exclusión de amplios sectores de la sociedad.

¿Y qué ocurre con el resto? Ahora existe un término para ellos: el precariado, o proletariado precario de la clase trabajadora mundial, cuyos miembros llevan vidas cada vez más precarias. Esto se relaciona con las actitudes hacia el país. Durante el período de gran crecimiento económico de las décadas de 1950 y 1960, los impuestos sobre las personas adineradas, las corporaciones y los dividendos eran mucho más altos. Poste-

riormente, el sistema tributario fue rediseñado de modo que los impuestos a los ricos disminuyeran y, como consecuencia, aumentarían los impuestos al resto de la población. En la actualidad, la tendencia consiste en favorecer los impuestos sobre los salarios y el consumo, que paga todo el mundo, en lugar de los impuestos sobre los dividendos, que afectan principalmente a los ricos. Las cifras al respecto son bastante sorprendentes. Por supuesto, existe un pretexto para ello. En este caso, se afirma que un sistema semejante fomenta la inversión y aumenta el empleo, pero no hay evidencia de ello. Si se quiere fomentar la inversión, hay que dar dinero a los pobres y a la clase trabajadora. Necesitan sobrevivir, por lo que gastarán sus salarios, lo que estimula la producción y la inversión y aumenta el empleo, etcétera. Si se es un ideólogo de la clase dominante, se sigue otra línea. De hecho, la situación actual es casi absurda. Las corporaciones tienen los bolsillos llenos de dinero. General Electric, por ejemplo, no paga impuestos y obtiene enormes beneficios. Registra sus beneficios en otros lugares o difiere el pago, pero

no paga impuestos por adelantado. Esta es una práctica habitual mediante la cual las mayores corporaciones de Estados Unidos han trasladado al resto de la población la responsabilidad de sostener a la sociedad. Según un informe del Institute on Taxation and Economic Policy, las sesenta mayores corporaciones de Estados Unidos evitaron pagar impuestos federales en 2018, pese a haber obtenido un total de 79.000 millones de dólares en beneficios. Otras investigaciones también han determinado que muchas corporaciones utilizan técnicas de elusión fiscal para reducir o eliminar el pago de impuestos, entre ellas trasladar beneficios a filiales situadas en paraísos fiscales o aprovechar lagunas del código tributario.

La solidaridad es bastante peligrosa desde la perspectiva de las élites. Estas defienden el interés propio en lugar de la preocupación por los demás, algo muy distinto de las ideas de figuras como Adam Smith, quien fundamentó su pensamiento económico en el principio de la empatía, al que consideraba esencial para las interacciones humanas. Sin embargo, estas

emociones humanas básicas se han ido extirpando minuciosamente de la mente de las personas. Esto puede observarse en la política, por ejemplo, en los ataques a la seguridad social. La seguridad social se basa en el principio de solidaridad, que implica cuidar de los demás. Significa pagar impuestos sobre los propios ingresos para que la viuda que vive al otro lado de la ciudad tenga algo con lo que vivir. Este principio sostiene a una parte importante de la población, pero no sirve a los intereses de los ricos, por lo que estos trabajan para desmantelarlo. Una forma de hacerlo consiste en privarlo de financiación. Si se quiere desmantelar un sistema, hay que empezar por quitarle los fondos. De ese modo dejará de funcionar, la gente se enfadará y exigirá otra cosa. Es una técnica habitual para privatizar determinados sistemas. Es cierto que la falta de financiación puede utilizarse como una técnica para debilitar o desmantelar sistemas, incluidos los públicos. En algunos casos se ha utilizado para justificar la privatización de servicios públicos, como la educación y la atención sanitaria, bajo el argumento de que el sector privado puede

prestarlos con mayor eficiencia. Sin embargo, también es importante considerar que los recortes de financiación pueden tener consecuencias negativas para los usuarios de esos sistemas, especialmente para quienes dependen en mayor medida de los servicios públicos, como los sectores de bajos ingresos o las minorías marginadas. Además, la privatización a menudo no mejora la calidad ni la accesibilidad de los servicios y puede crear nuevas barreras de acceso e incrementar los costos para los usuarios. Podemos verlo en los ataques contra las escuelas públicas, que se basan en el principio de solidaridad. El principio de solidaridad afirma: «Pago gustosamente mis impuestos para que los niños de enfrente puedan ir a la escuela». Esa es una emoción humana normal. Sin embargo, pretenden erradicarla de nuestra mente. Si mis hijos ya no van a la escuela, ¿por qué debería pagar impuestos? Quieren privatizarla y, de ese modo, todo el sistema de educación pública, desde las guarderías hasta la educación superior, está sometido a un duro ataque. Es una de las joyas de la sociedad estadounidense. La edad de oro de Estados

Unidos se caracterizó por un crecimiento extraordinario, y la educación pública desempeñó un papel importante. Sin embargo, en más de la mitad de los estados, la financiación universitaria procede ahora de las matrículas en lugar de la financiación estatal ordinaria. Se trata de un cambio radical y de una carga enorme para los estudiantes, y significa que, salvo que provengan de familias adineradas, terminarán sus estudios con un elevado nivel de endeudamiento. Cuando se tiene una deuda importante, se queda atrapado. Quizá se quiera ejercer como abogado de interés público, pero habrá que trabajar para un bufete corporativo a fin de pagar esas deudas. Una vez que se entra en ese mundo, no es fácil salir de él. Este ejemplo ilustra cómo la privatización y la falta de financiación estatal pueden afectar a la educación superior y, en consecuencia, a la movilidad social y económica. También pueden afectar la calidad de la educación y de la investigación realizada en las universidades, ya que la financiación privada puede estar guiada por intereses comerciales en lugar de por la excelencia académica. Es importante

señalar que este problema no es exclusivo de Estados Unidos; también se ha observado en otros países donde la educación superior ha experimentado procesos de privatización y reducciones de la financiación estatal. Según datos del College Board, en el curso académico 2020-2021, el costo promedio de matrícula y tasas en una universidad pública de cuatro años fue de 10.560 dólares para los estudiantes residentes en el estado y de 27.020 dólares para los estudiantes procedentes de otros estados. En las universidades privadas de cuatro años, el costo promedio de matrícula y tasas fue de 37.650 dólares. Estos costos no incluyen gastos adicionales como alojamiento, alimentación, libros y materiales, que pueden sumar varios miles de dólares al año. Según el Economic Policy Institute, en 2020 la deuda estudiantil promedio de los graduados universitarios era de 32.731 dólares.

Si analizamos la historia de la regulación, como las normas que rigen los ferrocarriles y las finanzas, podemos observar que las regulaciones suelen estar impulsadas o respaldadas por los consorcios económicos

sometidos a regulación. La razón es que saben que, con el tiempo, podrán controlar a los reguladores. Esto puede conducir a lo que se conoce como captura regulatoria, en la que las empresas reguladas controlan a los organismos reguladores. Puede llegarse al punto de que los grupos de presión bancarios redacten, en la práctica, las regulaciones financieras. Esta ha sido una tendencia recurrente a lo largo de la historia y constituye un resultado natural cuando se considera la distribución del poder.

Una de las cosas que se expandieron en la década de 1970 fue la actividad de los grupos de presión destinada a controlar la legislación. El gasto en actividades de presión ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Según el Center for Responsive Politics, en 2020 se gastaron más de 3.500 millones de dólares en actividades de presión en Washington, D. C. Los grupos de presión también ejercen una influencia considerable sobre el proceso legislativo y la formulación de políticas públicas en ámbitos como la atención san-

itaria, el medio ambiente, los derechos laborales, la energía y el complejo militar-industrial, entre otros.

En la década de 1970, los dirigentes empresariales estaban descontentos con el Estado de bienestar de la década de 1960, especialmente durante la presidencia de Richard Nixon, quien no goza de buena consideración entre el público, pero fue el último presidente de la era del New Deal y fue considerado un traidor a sus principios. Durante la administración Nixon se aprobaron leyes de seguridad del consumidor y regulaciones de salud y seguridad en el trabajo. Naturalmente, esto no agradó a los dirigentes empresariales, a quienes no les gustaban los impuestos elevados ni las regulaciones, por lo que pusieron en marcha un esfuerzo coordinado para cambiar la situación. Las actividades de presión aumentaron exponencialmente y la desregulación se aceleró de forma pronunciada.

No hubo crisis financieras en las décadas de 1950 y 1960 porque el aparato regulatorio del New Deal seguía vigente. A medida que comenzaron a desmantelarlo bajo presiones financieras, empresariales y políti-

cas, se produjeron más colapsos económicos. Esto continuó durante años, comenzó en la década de 1970 y se intensificó en la de 1980. Se pidió al Congreso que aprobara garantías federales de préstamos de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares para una empresa automotriz. Todo esto era relativamente seguro porque sabían que el gobierno acudiría al rescate. Reagan, por ejemplo, en lugar de permitir que pagaran el precio, rescató bancos como Continental Illinois, operación que se convirtió en el mayor rescate de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Como resultado, la administración Reagan terminó con una gran crisis económica conocida como la crisis de las asociaciones de ahorro y préstamo.

Esta crisis fue causada en gran medida por la desregulación de los sectores bancario y de las asociaciones de ahorro y préstamo, lo que permitió una mayor especulación y la concesión de préstamos riesgosos. Cuando algunos de esos préstamos no fueron devueltos, las instituciones financieras afrontaron pérdidas importantes que amenazaron su solvencia y la estabili-

dad de todo el sistema financiero. En lugar de permitir que los bancos en dificultades quebraran y asumieran las consecuencias de sus malas decisiones, como ocurrió durante la Gran Depresión de la década de 1930, el gobierno estadounidense decidió rescatarlos. Esto provocó una transferencia de deuda y riesgo del sector privado al sector público, agravando la crisis fiscal y económica en curso. Según cifras del gobierno estadounidense, se estimó que el costo total de la crisis rondó los 160.000 millones de dólares, incluido el costo de rescatar a las instituciones financieras implicadas. También se estima que alrededor de 747 asociaciones de ahorro y préstamo experimentaron problemas financieros durante este período.

En 1999 se dismanteló la regulación que separaba los bancos comerciales de los bancos de inversión, lo que condujo a los rescates de Bush y Obama. Cada vez que esto ocurre, se pide a los contribuyentes que rescaten a quienes crearon la crisis, cada vez con mayor frecuencia las grandes instituciones financieras. La Gramm-Leach-Bliley Act eliminó la separación entre

los bancos comerciales y las instituciones de inversión y seguros, permitiendo a las compañías financieras realizar una amplia gama de actividades financieras y posibilitando que los bancos se fusionaran con compañías de seguros y corredoras de bolsa. Esto se consideraba un factor importante de la crisis financiera de 2008. En cuanto a los rescates, durante la crisis financiera de 2008 la administración de George W. Bush aprobó un paquete de rescate de 700.000 millones de dólares conocido como Emergency Economic Stabilization Act of 2008 para auxiliar a bancos y compañías financieras en dificultades. Posteriormente, el presidente Barack Obama implementó su propio programa de rescate, la Economic Crisis Relief and Reinvestment Act de 2009, que incluyó medidas destinadas a estabilizar la economía, como inyecciones de capital en los bancos y asistencia a propietarios de viviendas que afrontaban ejecuciones hipotecarias. Los costos exactos de estos rescates varían según las fuentes y las metodologías utilizadas para calcularlos, pero algunas

estimaciones sitúan el costo total para los contribuyentes en alrededor de 1,2 billones de dólares.

En una economía capitalista, acontecimientos semejantes no deberían ocurrir. En un sistema capitalista, se permitiría que fracasaran los inversores que realizan inversiones riesgosas. Sin embargo, los ricos y poderosos no quieren un sistema capitalista; quieren poder acudir al gobierno en busca de ayuda tan pronto como se encuentran en dificultades y ser rescatados por los contribuyentes. Esto es lo que se conoce como «demasiado grande para quebrar». Las empresas y los inversores deberían asumir los riesgos de sus decisiones y aceptar las consecuencias de sus fracasos sin recurrir a la ayuda del Estado. Sin embargo, en la práctica, los poderosos y las grandes corporaciones suelen ejercer una influencia considerable sobre el gobierno y pueden presionarlo para obtener rescates o exenciones fiscales que les permitan eludir las consecuencias de sus actos. Esto puede crear un sistema injusto en el que los poderosos están protegidos y los menos poderosos quedan librados a su suerte.

Premios Nobel de Economía como Stiglitz y Krugman discrepan firmemente del rumbo que estamos siguiendo. Stiglitz ha sido crítico de la desregulación financiera y del aumento de la desigualdad económica, sosteniendo que ambas socavan la estabilidad económica y social. Krugman, por su parte, ha criticado las políticas de austeridad fiscal y ha defendido un aumento de la inversión pública para estimular el crecimiento económico. También ha sostenido que la desigualdad económica constituye un obstáculo para el crecimiento sostenible y que son necesarias políticas de redistribución para abordar este problema.

Las personas elegidas para resolver la crisis son quienes la crearon, como Robert Rubin y figuras procedentes de Goldman Sachs. Ellos crearon la crisis y ahora son más poderosos que nunca. ¿Es una coincidencia? No; cuando se elige a esas personas para diseñar un plan económico, ¿qué se esperaba que ocurriera? Mientras tanto, los pobres quedan librados a su suerte bajo las leyes del mercado, sin esperar ayuda alguna del gobierno, de modo que el gobierno se convierte en el prob-

lema y no en la solución. Esto es, en esencia, el neoliberalismo, que posee una naturaleza dual arraigada en la historia económica: un conjunto de reglas para los ricos y otro, opuesto, para los pobres. No cabe esperar otra cosa; esta es exactamente la dinámica que surge si la población consiente en ella. Las agencias de calificación crediticia, cuando evalúan la situación de las corporaciones, ya incorporan en sus cálculos el rescate financiado por los contribuyentes que esperan en la próxima crisis. Esto significa que los beneficiarios de esas calificaciones —los grandes bancos— pueden pedir prestado más dinero a menor costo y, de ese modo, desplazar a los pequeños competidores, lo que conduce a una mayor concentración. Se mire como se mire, las políticas están diseñadas de este modo, lo que no debería sorprender a nadie. Esto es lo que ocurre cuando se coloca el poder en manos de un pequeño sector de personas ricas dedicadas a aumentar su propio poder, como cabría esperar. La concentración de la riqueza conduce a la concentración del poder político, especialmente porque el costo de las elecciones se ha dis-

parado y ha colocado a los partidos políticos en manos de las grandes corporaciones.

El caso *Citizens United* de 2009 constituyó una sentencia de enorme importancia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta decisión tiene sus raíces en la Decimocuarta Enmienda, que fue creada originalmente para proteger los derechos de los antiguos esclavos. La enmienda establece: «Ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal». Sin embargo, también ha sido interpretada como una protección para las corporaciones, concediéndoles derechos que van más allá de los de los individuos. Tratar a las corporaciones como «personas» ante la ley puede considerarse controvertido porque son entidades jurídicas creadas por el Estado.

Hace más de un siglo se concedieron derechos individuales a las corporaciones y, con el paso de los años, esos derechos se ampliaron hasta superar los de las personas comunes. Por ejemplo, si General Motors invirtiera en México, obtendría dentro del país los mis-

mos derechos que una empresa mexicana. Mientras la noción de «personalidad jurídica» se amplió para incluir a las corporaciones, al mismo tiempo se restringió. Si se toma literalmente la Decimocuarta Enmienda, ningún extranjero indocumentado debería ser privado de sus derechos si se lo considera una persona. Sin embargo, los extranjeros indocumentados que viven en Estados Unidos, contribuyen a construir edificios para ciudadanos estadounidenses o cuidan sus jardines no son considerados personas. En cambio, General Electric es reconocida como una persona: una entidad de existencia perpetua e increíblemente poderosa. Esta perversión de principios morales básicos y del significado evidente de la ley resulta asombrosa.

En la década de 1970, los tribunales decidieron que el dinero es una forma de expresión en el caso emblemático *Buckley v. Valeo* (1976). Esta sentencia sentó las bases para el posterior caso *Citizens United*, que declaró que la libertad de expresión de las corporaciones, en particular su derecho a gastar dinero como deseen, no puede limitarse. Esto significa que las cor-

poraciones, que ya ejercían una influencia considerable mediante donaciones a campañas, cuentan ahora con una libertad prácticamente irrestricta para efectuar gastos políticos. Como consecuencia, se ha producido una entrada sustancial de dinero corporativo en la política, lo que ha suscitado preocupación por la influencia excesiva del dinero en el sistema político y por la capacidad de las corporaciones para moldear la toma de decisiones políticas en función de sus propios intereses.

Muchos sostienen que este fenómeno ha contribuido a un sistema político disfuncional, incapaz de abordar eficazmente los problemas reales que afrontan las personas comunes. Representa una amenaza importante para lo que queda de la democracia. Resulta revelador examinar decisiones judiciales como el caso crucial de *Citizens United*, en el que la sentencia trató a las corporaciones como personas y les concedió libertad de expresión. Esto plantea la pregunta de por qué General Electric no puede gastar tanto dinero como desee. Mientras que CBS goza de libertad de expresión, lo cual cabe esperar por tratarse de un medio de co-

municación que cumple una función de servicio público. General Electric, por otra parte, tiene como objetivo maximizar los beneficios de su director ejecutivo y sus accionistas. Esta decisión extraordinaria coloca al país en una situación en la que el poder corporativo se extiende más allá de lo que alguna vez fue imaginable. Perpetúa un círculo vicioso.

Existe una fuerza organizada que, pese a sus numerosos defectos, tradicionalmente ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por mejorar la vida de la población en general. Esa fuerza es el movimiento obrero organizado, que actúa como barrera frente a la tiranía corporativa. Es la única barrera que continúa funcionando e impide la perpetuación de este círculo vicioso que conduce a la tiranía corporativa.

Una de las principales razones del ataque concentrado y casi fanático contra los sindicatos y el movimiento obrero organizado es que estos actúan como una fuerza democratizadora. Constituyen una barrera que protege no solo los derechos de los trabajadores, sino también derechos populares más amplios.

Esto interfiere con los privilegios y el poder de quienes poseen y controlan la sociedad. El sentimiento anti-sindical entre las élites estadounidenses está profundamente arraigado, hasta el punto de amenazar los fundamentos mismos de los derechos laborales.

El sentimiento antisindical en Estados Unidos tiene una larga historia y persiste en determinados sectores. Desde la época de la industrialización en el siglo XIX, los empleadores han combatido los esfuerzos de los trabajadores por organizarse y formar sindicatos. Han utilizado tácticas como despidos, intimidación y violencia para impedir que los trabajadores se unan y negocien colectivamente mejores salarios y condiciones de trabajo.

A lo largo del siglo XX, el movimiento obrero logró avances importantes en materia de derechos y protecciones laborales. Entre ellos se encuentran el establecimiento del salario mínimo, la jornada laboral de 40 horas, el derecho a la negociación colectiva y la seguridad en el empleo. Sin embargo, siguen existiendo numerosos desafíos y barreras para la organización

sindical. El país cuenta con leyes y regulaciones laborales que dificultan la organización de sindicatos, como la Ley Taft-Hartley de 1947, que restringe la capacidad de los sindicatos para hacer huelga y negociar convenios colectivos con los empleadores. Además, muchos estados cuentan con las denominadas leyes de «derecho al trabajo», que permiten a los trabajadores no sindicalizados recibir los beneficios de los convenios colectivos sin pagar cuotas sindicales.

A pesar de estos desafíos, el movimiento obrero organizado continúa luchando por mejores condiciones de trabajo y por los derechos de los trabajadores. Los sindicatos han apoyado a trabajadores de diversas industrias y sectores, entre ellos la educación, la atención sanitaria, el comercio minorista, la construcción y la manufactura. También han defendido firmemente políticas públicas beneficiosas para los trabajadores, como el aumento del salario mínimo, la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y la ampliación de la seguridad social. El principio básico de la Organización Internacional del Trabajo es el derecho a

organizarse y formar sindicatos, algo que nunca ha sido ratificado en Estados Unidos. En este sentido, Estados Unidos se distingue de otras grandes sociedades. Esto no siempre fue un tabú en la política estadounidense, ya que la clase trabajadora del país tiene una historia larga y violenta en comparación con otras sociedades similares. Sin embargo, el movimiento obrero fue fuerte hasta la década de 1920, un período comparable al actual, cuando fue prácticamente aplastado. A mediados de la década de 1930, el movimiento comenzó a reconstruirse. Incluso el presidente Franklin Delano Roosevelt expresó su apoyo a una legislación progresista que beneficiara a la sociedad. Sin embargo, necesitaba una forma de conseguir que esa legislación fuera aprobada. Les dijo a dirigentes sindicales y a otros: «Oblíguenme a hacerlo». Sus palabras significaban que debían salir a las calles, organizar protestas y fortalecer el movimiento obrero. Con suficiente presión popular, él podría aprobar la legislación que deseaban. A mediados de la década de 1930 se produjo una combinación de un gobierno favorable y un importante ac-

tivismo popular. Hubo huelgas y ocupaciones que atemorizaron enormemente a los empresarios. Los empresarios estaban horrorizados. Si se lee la prensa económica de finales de la década de 1930, pueden encontrarse discusiones sobre la amenaza que los empleadores industriales percibían en el creciente poder político de las masas, que consideraban necesario reprimir. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una pausa temporal, pero inmediatamente después de la guerra comenzó con toda su fuerza la ofensiva empresarial. El macartismo fue utilizado como propaganda por la comunidad empresarial para atacar a los sindicatos durante la posguerra. Aunque el macartismo propiamente dicho terminó a mediados de la década de 1950, la ofensiva antisindical y anticomunista más amplia persistió durante las décadas siguientes, intensificándose durante los años de Reagan y continuando hasta comienzos de la década de 1990. La administración de Ronald Reagan fue conocida por su postura antisindical y antigubernamental. Reagan despidió a 11.000 controladores aéreos que se declararon en huel-

ga en 1981, lo que tuvo un impacto duradero sobre el movimiento obrero. También eliminó numerosas protecciones para los trabajadores, como las relativas al derecho de sindicalización y las leyes que los protegían frente a la discriminación en el lugar de trabajo. Durante la década de 1990, bajo la administración de George H. W. Bush, también existió una actitud hostil hacia los sindicatos y hacia el movimiento obrero en general. La administración trabajó para debilitar los derechos de los trabajadores tanto en el sector público como en el privado y promovió políticas que favorecían a los empleadores a expensas de los trabajadores. En síntesis, la hostilidad hacia los sindicatos y el trabajo organizado ha sido una constante de la política estadounidense, alimentada por diversos factores, entre ellos la propaganda empresarial, la antipatía hacia el comunismo y la ideología política. En la actualidad, menos del 7 % de los trabajadores del sector privado está sindicalizado. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2021 la tasa de sindicalización del sector privado fue del 6,3 %, frente al 16,8

% de 1983. Este descenso puede atribuirse a diversos factores, entre ellos la creciente presión de las empresas para desalentar la sindicalización, la deslocalización de empleos hacia países con mano de obra más barata y una serie de políticas gubernamentales que han debilitado los derechos laborales y sindicales. Como resultado, se ha disuelto la resistencia tradicional frente a la ofensiva de la clase empresarial, que posee una fuerte conciencia de clase.

Ahora bien, cuando alguien ocupa una posición de poder, quiere conservar la conciencia de clase para sí mismo, pero suprimirla en los demás. Durante los primeros años de la Revolución Industrial en Estados Unidos, la clase trabajadora era plenamente consciente de esto. Consideraba el trabajo asalariado una forma de esclavitud, y la idea era tan popular que se convirtió en lema del Partido Republicano. Se trataba de una fuerte conciencia de clase. Sin embargo, quienes poseen poder y privilegios no tienen interés alguno en que la gente desarrolle conciencia de clase. No quieren que la gente sepa que pertenece a la clase oprimida. Como

resultado, tenemos una de las pocas sociedades en las que simplemente no se habla de clase. Sin embargo, el concepto de clase es bastante sencillo: quienes dan las órdenes y quienes las cumplen definen, en esencia, la clase. Por supuesto, la cuestión tiene más matices y es más compleja, pero esa es la idea básica.

La industria de las relaciones públicas, el sector publicitario dedicado a crear consumidores, es un fenómeno que se desarrolló en los países más libres, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Existe una razón clara para ello. Hace aproximadamente un siglo se volvió evidente que controlar a la población mediante la fuerza no sería sencillo. Se había conquistado demasiada libertad. Existían organizaciones de trabajadores, partidos obreros en los parlamentos de muchos países, las mujeres estaban conquistando el derecho al voto, etcétera. Se necesitaban otros medios para controlar a la gente, y se llegó a la conclusión —expresada claramente— de que, para controlar a los individuos, era necesario controlar sus creencias y actitudes. Una de las formas más eficaces de moldear las actitudes de las personas

es lo que el gran economista político Thorstein Veblen denominó la fabricación de consumidores. Si alguien puede fabricar un producto y hacer creer a la gente que es esencial para dar sentido a su vida, quedará atrapada en el papel de consumidor.

La teoría de Thorstein Veblen sobre la fabricación de consumidores resulta interesante y pertinente en la actualidad, cuando la publicidad y la mercadotecnia son omnipresentes. Veblen sostenía que el capitalismo depende de crear un consumidor ansioso y ávido, dispuesto a comprar cualquier cosa para satisfacer su deseo de estatus y reconocimiento social. En su libro «The Theory of the Leisure Class», Veblen describió cómo la publicidad y la mercadotecnia se utilizan para estimular la demanda de bienes y servicios que no son necesarios para la vida cotidiana, pero se consideran símbolos de estatus y prestigio.

La fabricación de consumidores puede tener consecuencias negativas para la sociedad y el medio ambiente, ya que fomenta el consumo excesivo y el desperdicio de recursos naturales. También puede ser perjudi-

cial para la salud y el bienestar de las personas, pues puede favorecer la adicción a determinados productos y el endeudamiento. En respuesta a ello, algunos economistas han propuesto alternativas al modelo de consumo basado en el crecimiento constante, como la economía circular y la economía colaborativa, que se centran en la reutilización y el intercambio de los recursos existentes en lugar de la producción constante de nuevos bienes. Estas teorías buscan promover un consumo más consciente y sostenible y pueden contribuir a reducir la dependencia de la fabricación de consumidores en la economía capitalista.

Al ampliar el análisis, es importante reconocer el profundo impacto de la fabricación de consumidores sobre la sociedad y los individuos. La promoción incesante del consumismo no solo moldea los deseos y aspiraciones de las personas, sino que también perpetúa una cultura de materialismo y búsqueda de estatus. Las técnicas de publicidad y mercadotecnia están cuidadosamente diseñadas para crear una sensación de necesidad y urgencia y convencer a los individuos de

que su felicidad y realización pueden encontrarse mediante la adquisición de productos y servicios.

En este contexto, la fabricación de consumidores se convierte en una poderosa herramienta para sostener y reforzar las desigualdades sociales y económicas. Al equiparar el valor personal con las posesiones materiales y los símbolos de estatus, amplía la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Quienes no pueden seguir el ritmo de los ideales consumistas suelen quedar marginados y estigmatizados, lo que genera sentimientos de insuficiencia y exclusión.

Además, la fabricación de consumidores está estrechamente ligada al funcionamiento del sistema capitalista. Depende de la expansión continua de los mercados y del consumo para sostener el crecimiento económico y la rentabilidad. Sin embargo, este impulso hacia el crecimiento perpetuo se produce a expensas de recursos finitos y de la degradación ambiental. El consumo excesivo y los residuos generados por la fabricación de consumidores contribuyen al cambio climático, al agotamiento de los recursos y a los dese-

quilibrios ecológicos, planteando importantes desafíos para la sostenibilidad a largo plazo de nuestro planeta.

Los críticos sostienen que la fabricación de consumidores también perpetúa un ciclo de deuda e inestabilidad financiera. Para mantenerse a la altura de los estilos de vida idealizados que muestra la publicidad, las personas pueden recurrir a un endeudamiento excesivo y a una dependencia del crédito, lo que conduce a crisis financieras personales y a riesgos sistémicos más amplios. Esto puede agravar aún más las desigualdades sociales, ya que quienes cuentan con recursos financieros limitados tienen mayores probabilidades de caer en trampas de deuda y afrontar dificultades económicas.

Para abordar estos problemas han surgido enfoques alternativos del consumo y de los sistemas económicos. El concepto de economía circular, por ejemplo, busca minimizar los residuos y maximizar la eficiencia en el uso de los recursos mediante el diseño de productos duraderos, reparables y reciclables. Al avanzar hacia un modelo más sostenible y regenerativo,

la economía circular procura reducir la dependencia de la producción y el consumo constantes de nuevos bienes.

De manera similar, la economía colaborativa promueve el uso compartido de los recursos y fomenta compartir, alquilar e intercambiar bienes y servicios. Este modelo hace hincapié en el acceso por encima de la propiedad y favorece los vínculos comunitarios, reduciendo así la necesidad de una producción excesiva y los impactos ambientales asociados.

La educación y la concienciación desempeñan un papel fundamental para cuestionar la fabricación de consumidores y promover pautas de consumo más conscientes. Al fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, las personas pueden comprender mejor las técnicas persuasivas utilizadas en la publicidad y tomar decisiones más informadas sobre sus hábitos de consumo.

La fabricación de consumidores es una fuerza poderosa que moldea nuestros deseos, comportamientos y estructuras sociales. Perpetúa una cultura de ma-

terialismo, contribuye a las desigualdades sociales y plantea importantes desafíos ambientales. Explorar modelos alternativos de consumo y promover elecciones conscientes y sostenibles puede contribuir a contrarrestar la influencia de la fabricación de consumidores y allanar el camino hacia un futuro más justo y ambientalmente responsable.

En la prensa económica de la década de 1920 se discutía la necesidad de desviar la atención de las personas hacia los aspectos superficiales de la vida, como la moda y el consumo, para mantenerlas alejadas de otros asuntos. Esta estrategia se conoce como «manipulación de la demanda» y consiste en crear deseos y necesidades en los consumidores mediante técnicas de publicidad y mercadotecnia, impulsando así las ventas de productos y aumentando los beneficios de las empresas. Los especialistas en mercadotecnia y publicidad emplean diversas técnicas para manipular la demanda, entre ellas la creación de necesidades artificiales, la generación de ansiedad y miedo en los consumidores, la creación de estereotipos y el uso de la persuasión emo-

cional. Con frecuencia, estas técnicas se emplean de manera sutil para que los consumidores no sean conscientes de que están siendo manipulados. El resultado de esta estrategia es que las personas tienden a concentrarse en el consumo y la acumulación de bienes materiales, en lugar de dar prioridad a aspectos más importantes de la vida, como la familia, las relaciones, la comunidad y la política. Al mismo tiempo, la manipulación de la demanda puede tener efectos negativos sobre la salud mental de las personas, generando sentimientos de insatisfacción y ansiedad y fomentando conductas compulsivas y adictivas. Lamentablemente, el neoliberalismo como modelo económico ha fracasado en cuanto a su capacidad para proporcionar una vida mejor a la mayoría de la población. La brecha de riqueza entre ricos y pobres ha seguido ampliándose, las políticas económicas neoliberales han contribuido a la creciente precarización del trabajo y a la erosión de los derechos laborales, y la privatización de los servicios públicos ha provocado un deterioro de la calidad de vida de muchas personas. En lugar de continuar en

esta dirección, necesitamos una nueva visión económica que priorice el bienestar humano y el cuidado del medio ambiente por encima de los beneficios corporativos.

Esta idea se refleja en el pensamiento de intelectuales progresistas como Walter Lippmann, una figura destacada del progresismo del siglo XX. En su célebre obra «Public Opinion», publicada en 1922, Lippmann sostenía que había que poner al público en su lugar para que los hombres responsables pudieran tomar decisiones sin la interferencia de la «multitud desconcertada». Según él, el público debía ser espectador y no participante, y esto garantizaría una democracia que funcionara adecuadamente. Lippmann creía que la mayoría de las personas carecía de la capacidad y del tiempo necesarios para investigar y analizar críticamente los problemas políticos y económicos y, por lo tanto, necesitaba que una élite «inteligente y responsable» asumiera esa responsabilidad. Sin embargo, esta idea fue ampliamente criticada por otros pensadores progresistas, como John Dewey, quien sostenía que la

democracia necesitaba una ciudadanía activa e informada y que informar y educar al público era una tarea fundamental del gobierno y de las instituciones educativas.

La manipulación de la demanda mediante técnicas de publicidad y mercadotecnia ha tenido consecuencias importantes para el comportamiento de los consumidores y los valores sociales. El fracaso del neoliberalismo como modelo económico ha puesto de relieve la necesidad de enfoques alternativos que prioricen el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, las opiniones contrapuestas de intelectuales como Lippmann y Dewey subrayan el debate permanente sobre el papel de una ciudadanía informada y activa en las sociedades democráticas.

Históricamente, la propaganda ha explotado esta dinámica con un objetivo: fabricar consumidores. El escenario ideal es lo que vemos hoy, por ejemplo, cuando los adolescentes tienen libre una tarde de sábado y optan por ir a un centro comercial en lugar de a una biblioteca o a cualquier otro sitio. La idea consiste en

controlar a todos y transformar la sociedad en un sistema perfecto. Este sistema perfecto se basaría en una dualidad en la que el individuo y su televisor, o quizá hoy el individuo e internet, desempeñan un papel central. La televisión e internet muestran a los individuos cómo debe ser una vida adecuada y qué dispositivos deben poseer. Como resultado, las personas terminan gastando su tiempo y esfuerzo en comprar cosas que en realidad no quieren ni necesitan, que quizá acaben desechando, pero que creen necesarias para llevar una vida digna.

Este fenómeno puede observarse, por ejemplo, en los anuncios de televisión. Si se ha tomado un curso de economía, se sabe que los mercados deberían basarse en consumidores informados que toman decisiones racionales. Sin embargo, los anuncios de automóviles no están diseñados de ese modo. En lugar de proporcionar información concreta sobre los productos disponibles, los anuncios de automóviles muestran a una estrella del fútbol o a un actor realizando alguna actividad arriesgada con el vehículo, como subir una

montaña. La intención es crear consumidores mal informados que tomen decisiones irracionales. Ese es el objetivo de la publicidad. Cuando las mismas instituciones, incluido el sistema de relaciones públicas, organizan elecciones, emplean tácticas similares. Buscan crear un electorado mal informado que tome decisiones irracionales, a menudo contrarias a sus propios intereses. Lo vemos cada vez que tienen lugar estos espectáculos. Justo después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Obama recibió un premio de la industria publicitaria por su campaña, y la prensa económica internacional habló de la euforia de los ejecutivos. Esto sugiere que han estado tratando y promocionando a los candidatos como si fueran pasta dental, desde Reagan hasta la actualidad.

La campaña de Obama fue ampliamente elogiada por su enfoque innovador y su eficacia para movilizar a los votantes. Sin embargo, también recibió críticas por apoyarse en técnicas de microsegmentación y manipulación emocional. La campaña electoral suele incluir escasa discusión sobre cuestiones políticas, y ex-

iste una buena razón para ello: la opinión pública sobre las políticas difiere marcadamente de lo que desean los dirigentes de los dos grandes partidos y sus patrocinadores financieros. Las políticas se concentran cada vez más en los intereses privados de quienes financian las campañas, dejando al público marginado. Uno de los politólogos más destacados, Martin Gilens, presentó un estudio sobre la relación entre las actitudes y las políticas públicas que reveló que casi el 70 % de la población no ejerce influencia alguna sobre las políticas. Esta situación también puede observarse en otros países. La gente es consciente de ello y, como resultado, está indignada, frustrada y desconfía de las instituciones. Sin embargo, no está actuando de manera constructiva para abordar estos problemas, y la movilización popular y el activismo están adoptando una forma global y autodestructiva. Esto se manifiesta como una furia sin rumbo dirigida contra otras personas y contra grupos vulnerables, como vemos en casos de este tipo.

Ese es precisamente el objetivo: hacer que las personas se odien y se teman unas a otras y que se concentren únicamente en sí mismas sin actuar en beneficio de los demás. Constituye una medida, al menos en la conciencia pública, de cómo está funcionando la democracia. Por desgracia, la imagen no resulta alentadora.

Las tendencias que hemos venido describiendo en la sociedad estadounidense, a menos que cambien, muestran que esta se dirige hacia una sociedad espantosa, basada en la vil máxima de Adam Smith de «todo para mí y nada para los demás». Sería una sociedad en la que no existirían los instintos y emociones humanos normales de empatía, solidaridad y apoyo mutuo. Si la sociedad está controlada por la riqueza privada, reflejará los valores que actualmente encarna: la codicia y el deseo de maximizar los beneficios personales a expensas de los demás. Cualquier sociedad pequeña basada en estos principios resulta desagradable, aunque lamentablemente puede sobrevivir. Sin embargo, una sociedad mundial basada en estos principios se dirige hacia la destrucción.

Las tendencias crecientes de desigualdad y concentración del poder económico generan un alto riesgo de que la sociedad se vuelva espantosa. Si la mayor parte de la riqueza y del poder económico se concentra en manos de unos pocos individuos o corporaciones, el resto de la sociedad queda sin los recursos necesarios para vivir con dignidad y sin la capacidad de influir en las políticas públicas que la afectan. Esto puede conducir a una sociedad en la que más personas estén desesperadas y sin esperanza, lo que, a su vez, puede traducirse en mayores niveles de delincuencia, violencia y desorden social. Además, una sociedad en la que la mayoría de las personas siente que no ejerce influencia alguna sobre las políticas públicas es una sociedad en la que se pierde la confianza en las instituciones democráticas y disminuye la participación ciudadana.

La idea de «todo para mí y nada para los demás» se ha popularizado en la cultura estadounidense y refleja la mentalidad de ciertos sectores de la sociedad que consideran que el éxito individual y la acumulación de riqueza son más importantes que el bienestar colecti-

vo y la justicia social. Si esta mentalidad llegara a convertirse en la norma de la sociedad estadounidense, se perdería el sentido de comunidad y solidaridad fundamental para una sociedad democrática y justa. Por lo tanto, es importante adoptar medidas para combatir la concentración del poder económico y la desigualdad, fomentar la participación ciudadana y promover políticas que garanticen un nivel mínimo de bienestar para la sociedad en su conjunto. Solo de este modo podremos impedir que Estados Unidos se convierta en una sociedad espantosa y garantizar un futuro más justo y sostenible para todos.

Es importante señalar que este tipo de predicciones no son necesariamente inevitables ni definitivas, y todavía existe margen para cambiar el rumbo de la sociedad estadounidense. Muchos activistas y movimientos sociales trabajan intensamente para combatir la desigualdad y la concentración del poder, y existe un reconocimiento creciente de la necesidad de introducir cambios importantes en la política y la economía. Además, la historia ha demostrado que las sociedades

pueden experimentar transformaciones drásticas mediante la lucha y la organización colectiva. Es importante mantener una perspectiva crítica y permanecer informados sobre los desafíos y oportunidades que afrontamos como sociedad.

Aunque no es sencillo diseñar en detalle cómo sería una sociedad perfectamente justa y libre, podemos avanzar hacia ella y, lo que es más importante, preguntarnos cómo progresar en esa dirección. Si bien no existe una fórmula mágica para diseñar una sociedad perfectamente justa y libre, podemos trabajar para acercarnos a ella. Una forma de avanzar hacia una sociedad más justa consiste en impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la justicia social. Algunas de estas políticas pueden incluir la eliminación de barreras económicas, sociales y culturales para que todas las personas tengan acceso a la educación, la atención sanitaria, la vivienda y los servicios públicos básicos. También podemos trabajar en la creación de un sistema de justicia que proteja a las personas frente a la discriminación y garantice el acceso a

la justicia para todos. Otras políticas pueden implicar la regulación de las grandes corporaciones para impedir una concentración excesiva del poder y la explotación de los trabajadores y del medio ambiente. Además, podemos promover la democracia participativa y la participación ciudadana en la toma de decisiones para garantizar que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones se adopten en interés del bien común y no únicamente de unos pocos privilegiados.

John Dewey, destacado filósofo social de finales del siglo XX, sostenía que todas las instituciones productivas, comerciales y de prensa, si no estaban sometidas a control y participación democráticos, no darían lugar a una sociedad democrática funcional. Como afirmó: «La política será la sombra que las grandes empresas proyecten sobre la sociedad». Para Dewey, la democracia no era únicamente un sistema político, sino también una forma de vida en la que las personas participaban en la búsqueda del bien común y en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Creía que la educación era fundamental para alcanzar una sociedad

democrática y que las escuelas debían enseñar habilidades prácticas y cívicas para fomentar la participación de los ciudadanos en la sociedad.

Chomsky, por su parte, sostiene que las estructuras de autoridad, dominación y jerarquía, en las que alguien da órdenes y otra persona las obedece, deben justificarse. Cuando se las examina más de cerca, estas estructuras a menudo no pueden justificarse y, si no pueden hacerlo, deben ser desmanteladas. El objetivo consiste en ampliar el ámbito de la libertad y la justicia desmantelando formas ilegítimas de autoridad. Afortunadamente, el progreso que hemos observado en los últimos años ha consistido precisamente en eso. Tomemos como ejemplo la libertad de expresión, uno de los verdaderos logros de la sociedad estadounidense. No está consagrada en una ley ni en la Constitución. El reconocimiento de la libertad de expresión fue moldeado por decisiones de la Corte Suprema durante el siglo XX, con avances importantes en la década de 1960 durante el Movimiento por los Derechos Civiles. Fue el resultado de un movimiento popular masivo que exigió

derechos y se negó a retroceder. En ese contexto, la Corte Suprema estableció un estándar elevado para la libertad de expresión. Otro ejemplo son los derechos de las mujeres. Las mujeres también comenzaron a cuestionar las estructuras opresivas, se negaron a aceptarlas y movilizaron a otras personas para que se unieran a su causa. Es mediante este tipo de acción colectiva como se conquistan los derechos.

Nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestras instituciones presentan defectos importantes que deben corregirse, y a menudo ello requiere acciones fuera del marco comúnmente aceptado. Tendremos que encontrar nuevas formas de acción política. Los activistas son quienes han creado los derechos de los que disfrutamos hoy. No solo aplican políticas basadas en la información que reciben, sino que también contribuyen a nuestra comprensión. Es importante recordar que se trata de un proceso recíproco. Debemos aprender cómo funciona el mundo, lo que nos ayudará a comprender cómo avanzar. Existen grandes oportunidades. Es una sociedad libre y, aunque el gobierno estadounidense

puede tener capacidad de coacción y las corporaciones pueden intentar ejercer influencia, no disponen de los mecanismos necesarios. Hay muchas cosas que pueden hacerse si las personas se organizan y luchan por sus derechos, como lo han hecho en el pasado y han conseguido numerosas victorias. Lo que importa son los incontables pequeños actos realizados hoy por personas anónimas, que sientan las bases de acontecimientos importantes que serán recordados por la historia. Ellas son quienes hicieron las cosas importantes en el pasado y serán quienes tengan que hacerlas en el futuro. Al ampliar el análisis, podemos observar que tanto Dewey como Chomsky subrayan la importancia del control y la participación democráticos para configurar una sociedad justa y equitativa. El argumento de Dewey de que todas las instituciones, incluidas las productivas, comerciales y de prensa, deberían estar sometidas a control democrático destaca la necesidad de que el poder y la toma de decisiones se distribuyan entre la población. Esta perspectiva coincide con los principios de la democracia, en la que los ciudadanos

participan activamente en los procesos de toma de decisiones y cuentan con iguales oportunidades para intervenir en la configuración de su sociedad. La crítica de Chomsky a la autoridad, la dominación y la jerarquía pone aún más de relieve la necesidad de cuestionar y desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad y la opresión. Su afirmación de que las estructuras de autoridad deben justificarse destaca la importancia de la rendición de cuentas y del examen de las dinámicas de poder dentro de la sociedad. Los ejemplos de Chomsky sobre la libertad de expresión y los derechos de las mujeres muestran el poder transformador de la acción colectiva para cuestionar y remodelar sistemas opresivos.

Tanto Dewey como Chomsky reconocen el papel del activismo y de los movimientos de base en el impulso del cambio social. Subrayan que el progreso y la conquista de derechos no se conceden desde arriba, sino que son el resultado de esfuerzos concertados de individuos y comunidades. Al organizarse, movilizarse y cuestionar sistemas injustos, las personas pueden abrir

camino hacia un futuro más justo e inclusivo. En síntesis, el análisis de las perspectivas de Dewey y Chomsky pone de relieve la importancia del control democrático, la participación y la acción colectiva para construir una sociedad justa y equitativa. Sus reflexiones nos alientan a evaluar críticamente las estructuras existentes, cuestionar la autoridad injusta y trabajar activamente por un futuro más democrático y justo.

ECONOMÍA SOLIDARIA

Exploración de sus características, beneficios y desafíos.

El concepto de economía solidaria se ha convertido en un tema de creciente interés en todo el mundo. Esta forma de economía se basa en la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad, en contraposición con la competencia y el afán de lucro propios del capitalismo tradicional. En este capítulo exploraremos las características, los beneficios y los desafíos de la economía solidaria.

La economía solidaria se define como una organización económica que busca satisfacer las necesidades humanas mediante la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad, en lugar de hacerlo mediante la competencia y la búsqueda de beneficios. Esta forma de economía se basa en la creación y el fortalecimiento de redes de cooperación y solidaridad en las que las per-

sonas trabajan juntas para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida.

Una de las características fundamentales de la economía solidaria es su enfoque en las personas y las comunidades. En lugar de priorizar la acumulación de riqueza y el beneficio individual, busca mejorar las condiciones de vida de las personas y fortalecer la comunidad. Esto se logra mediante la creación de redes de colaboración y solidaridad en las que las personas trabajan juntas para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. También hace hincapié en la sostenibilidad ambiental y la justicia social. En lugar de explotar los recursos naturales y a las personas con fines de lucro, la economía solidaria busca proteger el medio ambiente y promover la justicia social. Esto se logra mediante la implementación de prácticas y políticas que promueven la sostenibilidad y la justicia social.

Los beneficios de la economía solidaria son numerosos. En primer lugar, promueve la inclusión social y la igualdad de oportunidades al permitir que las personas trabajen juntas para satisfacer sus necesidades y

mejorar sus condiciones de vida. En segundo lugar, promueve la sostenibilidad ambiental mediante el fomento de prácticas y políticas que protegen el medio ambiente. Por último, cultiva la democracia económica al permitir que las personas tengan control sobre su propia economía y tomen decisiones colectivamente.

Sin embargo, la economía solidaria también afronta diversos desafíos. Uno de los principales es la falta de financiación y de apoyo por parte de los gobiernos y las instituciones financieras tradicionales. Además, afronta desafíos relacionados con la organización y la coordinación, ya que a menudo implica la creación de redes y la colaboración entre diversas organizaciones y comunidades. Esto puede resultar difícil debido a la complejidad de la coordinación y a la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza y la solidaridad. Según algunos autores, «la economía solidaria afronta la dificultad de conciliar la necesidad de coordinación con la necesidad de preservar la diversidad y la autonomía de sus actores» (Laville, 2010).

La economía solidaria ofrece un modelo económico alternativo que prioriza la colaboración, la ayuda mutua y la justicia social. Aunque presenta numerosos beneficios, como la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, también afronta desafíos relacionados con la financiación, la organización y la coordinación. No obstante, la exploración y el desarrollo continuos de la economía solidaria tienen el potencial de fomentar un sistema económico más justo y sostenible.

La economía solidaria constituye un modelo económico transformador que ha suscitado un interés creciente en todo el mundo. A diferencia de la competencia y el afán de lucro que caracterizan al capitalismo tradicional, este enfoque alternativo se construye sobre principios de colaboración, ayuda mutua y solidaridad. Al profundizar en la naturaleza multifacética de la economía solidaria, este análisis busca explorar sus características distintivas, sus beneficios potenciales y los múltiples desafíos que afronta.

En esencia, la economía solidaria representa una organización económica centrada en satisfacer las

necesidades humanas mediante la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad, en lugar de mediante la competencia y la búsqueda de beneficios. Se concentra en construir y fortalecer redes de cooperación y solidaridad en las que los individuos trabajan juntos para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. Cabe destacar que una característica fundamental de la economía solidaria reside en su énfasis en las personas y las comunidades: desplaza el foco de la acumulación de riqueza y el beneficio individual hacia la mejora de la calidad de vida de las personas y el fortalecimiento del bienestar comunitario. Esto se logra mediante la creación de redes colaborativas e iniciativas impulsadas por la solidaridad en las que los individuos reúnen sus recursos y esfuerzos para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. Además, la economía solidaria prioriza la sostenibilidad ambiental y la justicia social, con el objetivo de proteger el medio ambiente y garantizar resultados justos y equitativos. Persigue estos objetivos mediante la

implementación de prácticas y políticas que promueven la sostenibilidad y la justicia social.

Los beneficios de la economía solidaria son múltiples. En primer lugar, fomenta la inclusión social y la igualdad de oportunidades al permitir que las personas trabajen colectivamente para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. En segundo lugar, promueve la sostenibilidad ambiental mediante el impulso de prácticas y políticas que protegen el medio ambiente. Por último, cultiva la democracia económica al dar a las personas control sobre sus propias actividades económicas y tomen decisiones colectivamente. No obstante, la economía solidaria afronta diversos desafíos. Uno de los principales obstáculos radica en la falta de recursos financieros y de apoyo por parte de los gobiernos y las instituciones financieras tradicionales. Asimismo, afronta dificultades en materia de organización y coordinación, dado que con frecuencia implica crear redes y colaboraciones entre organizaciones y comunidades diversas. La complejidad de la coordinación y la necesidad de construir relaciones basadas

en la confianza y la solidaridad pueden plantear dificultades. Como señala Laville (2010), «la economía solidaria afronta la dificultad de conciliar la necesidad de coordinación con la necesidad de preservar la diversidad y la autonomía de sus actores».

Otro desafío importante es el acceso limitado a los recursos financieros y técnicos necesarios para desarrollar proyectos y emprendimientos de economía solidaria. Laville (2010) sostiene que la economía solidaria afronta una triple dificultad: la falta de recursos financieros y técnicos, la debilidad de las estructuras de apoyo y el desconocimiento o la hostilidad de las autoridades públicas. Superar estos obstáculos exige encontrar vías innovadoras de financiación y apoyo, así como fortalecer la infraestructura de respaldo. A pesar de estos desafíos, la economía solidaria ha demostrado su viabilidad y sostenibilidad como modelo alternativo para abordar las desigualdades y promover el desarrollo local. Con su énfasis en la colaboración, la solidaridad y la participación democrática, la economía solidaria tiene el potencial de contribuir a la creación de una

sociedad más justa y equitativa. Como destaca Laville (2015), la economía solidaria se basa en la construcción de relaciones horizontales y colaborativas, lo que puede resultar difícil en un mundo dominado por relaciones económicas competitivas y por la lógica del mercado. Esto puede requerir la creación de estructuras y mecanismos específicos que faciliten la cooperación y el intercambio, como redes para el intercambio de bienes y servicios, cooperativas de trabajadores o estructuras de gobernanza participativa. Además, la economía solidaria afronta desafíos en términos de financiación y sostenibilidad. Las iniciativas de economía solidaria suelen tener dificultades para acceder a recursos financieros y apoyo económico, lo que puede limitar su capacidad de crecimiento y desarrollo. Por ello, resulta crucial explorar mecanismos innovadores de financiación y apoyo para las iniciativas de economía solidaria, como fondos de inversión social o financiación colectiva. Otro desafío fundamental consiste en conciliar los objetivos económicos y sociales de la economía solidaria con las exigencias del mer-

cado. Equilibrar la necesidad de competir en un mercado globalizado y exigente con el mantenimiento de los compromisos con la justicia social y la sostenibilidad requiere adoptar estrategias innovadoras de comercialización y distribución. Estas estrategias permitirían que las iniciativas de economía solidaria prosperaran en el mercado mundial sin comprometer sus valores y principios fundamentales. La economía solidaria constituye una alternativa convincente a los modelos capitalistas tradicionales, al hacer hincapié en la colaboración, la solidaridad y la participación democrática. Aunque afronta desafíos importantes relacionados con la organización, la financiación y la sostenibilidad, ofrece una vía sostenible y equitativa para abordar las desigualdades sociales y promover el desarrollo local. Mediante la exploración de nuevas formas de cooperación, la obtención de financiación adecuada y la adopción de estrategias creativas de comercialización, la economía solidaria puede seguir creciendo y realizar contribuciones sustanciales a la construcción de una sociedad más justa y sostenible.

Lamentablemente, como modelo económico alternativo, la economía solidaria carece de cifras precisas sobre su alcance y crecimiento, ya que se trata de un movimiento amplio y diverso que no está regulado por un organismo central. No obstante, diversos estudios y análisis ofrecen estimaciones de su impacto en determinadas regiones y sectores. Por ejemplo, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que, en América Latina y el Caribe, la economía solidaria emplea a más de once millones de personas y genera el 10 % del producto interno bruto (PIB) en países como Brasil y Uruguay. Además, se ha observado que las cooperativas, una de las formas más comunes de economía solidaria, presentan una tasa de supervivencia y éxito empresarial superior a la de las empresas tradicionales. Otro estudio realizado por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en España reveló un crecimiento del 17 % del sector de la economía solidaria entre 2013 y 2017, con aproximadamente 10.000 empresas y organizaciones que operaban bajo este modelo económico. Aunque

estas cifras son limitadas y no representan todo el alcance de la economía solidaria, indican la existencia de un sector en crecimiento con potencial para generar empleo y desarrollo económico y reducir las desigualdades.

Además, los datos muestran que las cooperativas, como una de las formas más extendidas de economía solidaria, presentan una tasa de supervivencia y éxito empresarial superior a la de las empresas tradicionales. Un estudio realizado por REAS en España reveló un crecimiento del 17 % del sector de la economía solidaria entre 2013 y 2017, con aproximadamente 10.000 empresas y organizaciones que operaban bajo este modelo económico. Esto sugiere que la economía solidaria tiene el potencial de generar empleo y desarrollo económico de manera sostenible a lo largo del tiempo. Es importante señalar que estas cifras no abarcan toda la extensión de la economía solidaria, ya que muchas iniciativas y proyectos no están incluidos en las estadísticas oficiales. Sin embargo, la tendencia ascendente del

crecimiento de la economía solidaria indica que constituye una alternativa económica viable y en expansión.

La economía solidaria se basa en valores como la solidaridad, la cooperación, la equidad y la sostenibilidad y promueve la creación de empresas y organizaciones que buscan generar beneficios económicos, sociales y ambientales. Algunos ejemplos de empresas y organizaciones que aplican este modelo son:

Cooperativas de trabajadores: son empresas en las que los trabajadores son los propietarios y gestionan el negocio democráticamente y participan tanto en los beneficios como en la toma de decisiones. Las cooperativas de trabajadores pueden adoptar diversas formas, entre ellas cooperativas de producción, de servicios y de consumo. Un ejemplo de este tipo de cooperativa es la Cooperativa Integral Catalana, en España, que se dedica a la producción y distribución de alimentos orgánicos y otros productos. Según datos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en 2019 existían más de tres millones de cooperativas en todo el mundo, con más de 1.200 millones de miembros y más de

280 millones de empleos generados. Se estima que existen más de 10.000 cooperativas de trabajadores en el mundo, que emplean a más de cinco millones de personas. Países como Italia y Argentina han reconocido las cooperativas de trabajadores como una forma jurídica de empresa y han experimentado un crecimiento importante durante las últimas décadas. En general, se ha demostrado que las cooperativas de trabajadores benefician tanto a los empleados como a la economía en su conjunto al generar empleo y fomentar la participación democrática en la gestión empresarial. Además, dado que los trabajadores son propietarios de la empresa, tienen un incentivo adicional para trabajar de manera eficiente y asegurar el éxito del negocio a largo plazo.

La economía solidaria también abarca otros modelos, como las organizaciones de comercio justo, las monedas sociales, la agricultura apoyada por la comunidad y las redes de ayuda mutua, entre otros. Cada uno de estos modelos contribuye a construir una economía centrada en el bienestar social y ambiental,

con el objetivo de abordar problemas sistémicos de desigualdad y promover una sociedad más justa y sostenible. La economía solidaria afronta desafíos en términos de organización, financiación y sostenibilidad, así como la necesidad de conciliar sus objetivos económicos y sociales con las exigencias del mercado mundial. No obstante, el creciente interés por la economía solidaria y los éxitos que ha demostrado ponen de manifiesto su potencial como modelo económico transformador que prioriza a las personas y al planeta por encima del beneficio. A medida que las sociedades afrontan problemas urgentes como la desigualdad, el cambio climático y la justicia social, la economía solidaria ofrece una vía prometedora hacia un futuro más justo y sostenible. Banca y finanzas éticas: los bancos y las instituciones financieras éticas representan una respuesta crítica y activa frente a las dinámicas predominantes de especulación financiera y maximización de beneficios que han caracterizado el funcionamiento de la economía mundial durante las últimas décadas. En un contexto en el que la desigual-

dad social y económica se ha ampliado de forma significativa y la degradación ambiental y la crisis climática se han convertido en problemas mundiales urgentes, estas entidades financieras surgen como una alternativa concreta y eficaz. Las instituciones financieras éticas promueven una economía más justa y sostenible mediante la inversión en proyectos que generan impactos sociales y ambientales positivos. Mientras los bancos tradicionales buscan maximizar la rentabilidad, incluso a costa de la explotación laboral, la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad, los bancos y las instituciones financieras éticas, como Triodos Bank, se orientan a generar beneficios sociales y ambientales. Además, estos bancos e instituciones financieras éticas evitan la especulación y la asunción excesiva de riesgos en la gestión de sus recursos, contribuyendo así a minimizar los riesgos de inestabilidad financiera y de crisis económicas. En cambio, se concentran en financiar proyectos que promueven la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible. En conclusión, la existencia de bancos e instituciones financieras éticas constituye

una alternativa práctica para promover una economía más justa y sostenible. Por ejemplo, según el informe anual de Triodos Bank correspondiente a 2020, el 83 % de los préstamos concedidos por la institución se destinó a proyectos sostenibles y sociales, como energías renovables, agricultura orgánica, vivienda sostenible e iniciativas culturales y sociales. Asimismo, el informe destaca que el banco ha financiado un total de 1.200 proyectos sostenibles en Europa y América Latina y que el 96 % de los proyectos financiados cumple los criterios de sostenibilidad del banco. Otro ejemplo de institución financiera ética es el banco neerlandés ASN Bank, que informa que el 96 % de sus inversiones está destinado a proyectos y empresas sostenibles y éticos, como energías renovables, transporte sostenible, vivienda social y empresas que promueven la igualdad de género y la diversidad. Estos ejemplos ilustran cómo los bancos éticos están comprometidos con la financiación de proyectos sostenibles y sociales, lo que se traduce en inversiones concretas en la economía real des-

tinadas a producir un impacto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad.

Empresas sociales: las empresas sociales ofrecen una alternativa al modelo empresarial tradicional que busca maximizar los beneficios a cualquier costo. Estas empresas procuran abordar un problema social o ambiental mediante la producción y venta de bienes y servicios. En lugar de maximizar los beneficios para sus accionistas, las empresas sociales reinvierten sus ganancias en su misión social con el objetivo de producir un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente. Un ejemplo de empresa social es la marca de ropa Patagonia, especializada en la producción de prendas y accesorios para actividades al aire libre. Además de ofrecer productos de alta calidad, Patagonia se centra en la sostenibilidad ambiental y social. La empresa ha implementado diversas iniciativas para reducir su impacto ambiental, como el uso de materiales reciclados y orgánicos en sus productos y la creación de programas de apoyo a comunidades locales y proyectos ambientales. Patagonia también dona el 1 % de sus ventas

anuales a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la conservación y protección del medio ambiente. Empresas sociales como Patagonia demuestran que es posible hacer negocios de manera responsable y producir un impacto positivo sobre la sociedad y el medio ambiente. A medida que más empresas adopten este enfoque, podremos observar una transformación del mundo empresarial hacia un modelo más justo y sostenible.

Por ejemplo, según un informe de 2018 de la firma consultora Oxfam, se estima que las grandes corporaciones evaden alrededor de 100.000 millones de dólares en impuestos cada año en todo el mundo. Esta cantidad representa un volumen importante de recursos que podrían destinarse a financiar políticas públicas y programas sociales en beneficio de la sociedad. En cuanto a la evasión fiscal, un estudio de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que los países miembros pierden alrededor de 240.000 millones de dólares al año debido a la evasión fiscal, una pérdida importante

de ingresos para los gobiernos que afecta la equidad y la justicia tributaria. En términos generales, la economía solidaria busca modificar el paradigma económico dominante basado en la maximización de beneficios a corto plazo, la competencia y el individualismo, y promueve un modelo económico más justo, sostenible y democrático en el que se concede gran importancia a los aspectos sociales y ambientales.

ECONOMÍA CIRCULAR Y REGENERATIVA

Características y evolución

El concepto de economía circular y regenerativa ha adquirido una importancia creciente en la búsqueda de enfoques sostenibles para el desarrollo económico. Este enfoque se basa en el diseño de sistemas económicos que minimicen la generación de residuos y la extracción de recursos naturales y promuevan la reutilización, el reciclaje y la regeneración. La economía circular se centra en optimizar el ciclo de vida de los materiales, los productos y los recursos naturales, mientras que la economía regenerativa se centra en restaurar y mejorar los ecosistemas y los recursos naturales. En los últimos años, gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil han mostrado un interés creciente en desarrollar modelos de economía circular y regenerativa. Por ejemplo, la Unión Europea ha adoptado un Plan de Acción para la Economía Circu-

lar destinado a promover una economía más circular en la región.

«La economía regenerativa se basa en la idea de que los sistemas económicos y ecológicos están intrínsecamente interconectados y de que la regeneración de uno es esencial para la regeneración del otro» (Economic Innovation Group, 2018).

Según un informe de la Ellen MacArthur Foundation, se estima que la adopción mundial de la economía circular generará beneficios económicos de hasta 2,7 billones de dólares para 2030. También se estima que la economía circular podría crear hasta 700.000 empleos adicionales en Europa para 2030.

«La economía circular busca mantener los productos, componentes y materiales en su máximo valor y utilidad en todo momento, reduciendo la generación de residuos y min-

imizando el uso de recursos naturales»
(Ellen MacArthur Foundation, 2013).

En cuanto a la evolución de la economía circular, Ámsterdam destaca como caso de estudio. La ciudad ha adoptado un enfoque integral de la economía circular en su estrategia de desarrollo económico. Ámsterdam ha implementado medidas como la creación de un mercado de materiales secundarios y la promoción de la economía funcional, que consiste en ofrecer servicios en lugar de productos para reducir la generación de residuos.

Otro ejemplo es Interfaz, líder mundial en la fabricación de alfombras modulares, que ha adoptado un enfoque de economía circular en su estrategia empresarial. La empresa ha implementado medidas como el uso de materiales reciclados en sus productos y el diseño de productos modulares que facilitan su reutilización y reciclaje al final de su ciclo de vida.

«En la economía circular, la innovación se centra en la reutilización, la reparación, la remanufactura y el reciclaje de productos y materiales, así como en la generación de nuevos modelos de negocio basados en la sostenibilidad» (Massachusetts Institute of Technology, 2019).

La economía circular y regenerativa ha sido objeto de diversos estudios y proyectos en todo el mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido, la empresa tecnológica ReLondon lanzó en 2019 un programa denominado «Advanced London», cuyo objetivo es transformar para 2030 el sistema de residuos y recursos de la ciudad en una economía circular. El programa reúne a una amplia variedad de empresas, instituciones y organizaciones para implementar soluciones innovadoras en la gestión de residuos y recursos, entre ellas infraestructura para la recuperación y reutilización de materiales, la promoción de productos y servicios circulares y sistemas de intercambio y colaboración entre empresas.

Un estudio de 2019 de la Ellen MacArthur Foundation titulado «Circular Economy in Action» presentó varios casos de estudio de distintos sectores y regiones del mundo en los que se han implementado con éxito soluciones circulares y regenerativas. Por ejemplo, en el sector textil, la empresa española Ecoalf ha desarrollado una tecnología que permite transformar residuos plásticos marinos en materiales de alta calidad para la producción de prendas y accesorios de moda sostenible. Otro caso de estudio destacado es la ciudad de San Francisco, que ha implementado políticas y programas para promover la economía circular y reducir la generación de residuos. Por ejemplo, la ciudad ha promulgado una ley que exige que todos los residuos orgánicos sean reciclados o compostados y ha establecido un programa de «compras verdes» que promueve la adquisición de productos y servicios sostenibles y circulares por parte de las empresas y el gobierno local.

Cabe señalar que la economía circular y regenerativa está cobrando impulso a escala mundial. Según un informe de la Ellen MacArthur Foundation, se prevé

que la economía circular pase de un valor de 1,2 billones de dólares en 2018 a 4,5 billones de dólares en 2030, lo que representa una oportunidad significativa para abordar los actuales desafíos económicos, ambientales y sociales.

«La economía circular y regenerativa puede impulsar la innovación, la eficiencia en el uso de los recursos, la creación de empleo y el crecimiento económico, al tiempo que reduce el impacto ambiental y aumenta la resiliencia del sistema» (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

En cuanto a la regeneración, un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030 podría generar beneficios económicos de hasta 9 billones de dólares. También se estima que la regeneración de los

ecosistemas podría crear hasta 191 millones de empleos en todo el mundo para 2030.

Para avanzar en la transición hacia una economía circular y regenerativa se necesita un enfoque colaborativo y sistémico que involucre a todas las partes interesadas pertinentes, incluidas empresas, gobiernos, consumidores y comunidades. Algunas posibles soluciones son:

Diseñar productos y servicios con un enfoque de circularidad y regeneración: las empresas pueden diseñar productos y servicios más duraderos, reparables y reciclables, y utilizar materiales y procesos de producción sostenibles.

Promover la reutilización y el reciclaje: es importante fomentar la reutilización y el reciclaje de productos y materiales y desarrollar sistemas eficientes para la recuperación y el procesamiento de residuos.

Establecer políticas y marcos regulatorios: los gobiernos pueden establecer políticas y marcos regulatorios que promuevan la economía circular y regenerativa, incluidos incentivos fiscales para las empresas

que adopten prácticas más sostenibles y normas que fomenten la sostenibilidad y la eficiencia.

Cambio cultural: también es necesario un cambio cultural en el que los consumidores sean más conscientes de sus elecciones y estilos de vida y demanden productos y servicios más sostenibles.

En resumen, la transición hacia una economía circular y regenerativa es un proceso complejo que exige la colaboración y el compromiso de múltiples actores, así como cambios en la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los recursos. Es una oportunidad para construir un sistema económico más justo, sostenible y resiliente que tenga en cuenta los límites de los recursos naturales y las necesidades de las generaciones futuras.

Las siguientes mejoras pueden contribuir a avanzar en la transición hacia una economía circular y regenerativa. En primer lugar, debe promoverse la innovación y la investigación en tecnologías y prácticas que permitan una gestión más eficiente y sostenible de los recursos. Esto podría implicar una mayor inversión en inves-

tigación y desarrollo por parte de empresas y gobiernos, así como incentivos para fomentar la innovación. En segundo lugar, debe impulsarse una mayor colaboración entre distintos sectores y actores para favorecer cadenas de suministro más circulares y cerradas. Esto podría implicar la creación de plataformas colaborativas y la promoción de modelos de negocio en los que varias empresas trabajen conjuntamente para cerrar el ciclo de los recursos. En tercer lugar, debe mejorarse la educación y la sensibilización públicas sobre las cuestiones relacionadas con la economía circular y regenerativa para fomentar una mayor conciencia y participación de la sociedad. Esto podría incluir la incorporación de temas de sostenibilidad y economía circular en la educación desde edades tempranas, así como la realización de campañas de sensibilización. Por último, los gobiernos deberían promover una regulación más estricta y una fiscalidad verde que incentiven a las empresas y a la sociedad a adoptar prácticas más sostenibles y circulares. Esto podría incluir impuestos sobre la contaminación y el uso de recursos naturales,

así como incentivos fiscales para las empresas que adopten prácticas más sostenibles y circulares.

La implementación de una economía circular y regenerativa presenta diversos desafíos y obstáculos. Uno de los principales es la transformación de los modelos de negocio, ya que una economía circular y regenerativa requiere un enfoque más integral de la producción y el consumo en el que los productos y materiales permanezcan en uso durante ciclos de vida más prolongados. Esto exige redefinir productos, servicios y modelos de negocio, lo que a su vez requiere una mayor colaboración entre las empresas y otras partes interesadas, como los gobiernos y las comunidades locales. Otro desafío es la falta de incentivos económicos y políticos para adoptar una economía circular y regenerativa. En muchos casos, el modelo económico actual favorece la producción y el consumo lineales, lo que puede dificultar la transición hacia un modelo circular y regenerativo. Del mismo modo, las políticas gubernamentales y las prácticas empresariales también pueden favorecer la producción y el consumo lineales. Por lo tanto, se nece-

sitan políticas y prácticas más eficaces para promover la economía circular y regenerativa. A pesar de estos desafíos, diversas iniciativas y estrategias en todo el mundo buscan impulsar una economía circular y regenerativa. En Europa, la Comisión Europea puso en marcha en 2015 una Estrategia Europea de Economía Circular, con el objetivo de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir la producción de residuos en toda la economía europea. Asimismo, diversas organizaciones y empresas han adoptado con éxito modelos circulares y regenerativos, como la empresa neerlandesa Philips, que ha pasado de vender productos a ofrecer soluciones de iluminación. En conclusión, la economía circular y regenerativa constituye una alternativa práctica y sostenible al actual modelo lineal de producción y consumo. Sin embargo, su implementación requiere cambios significativos en los modelos de negocio y las políticas económicas vigentes, así como una mayor colaboración entre empresas, gobiernos y comunidades locales. Mediante iniciativas y estrategias eficaces, es posible avanzar hacia una economía más circular y re-

generativa que beneficie tanto al medio ambiente como a la sociedad.

ECONOMÍA DEMOCRÁTICA

Características

Una economía democrática es un modelo económico que busca establecer procesos democráticos en la gestión económica y la toma de decisiones. En este modelo, el poder de decisión no se limita a los propietarios de las empresas ni a las autoridades gubernamentales, sino que también se extiende a los trabajadores, los consumidores y otras partes interesadas de la economía. Se basa en la idea de que la democracia no debe limitarse al ámbito político, sino aplicarse también al ámbito económico, ya que las decisiones económicas tienen un impacto significativo en la vida de las personas.

Una economía democrática busca garantizar que las decisiones económicas se tomen de manera justa y transparente, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos involucrados. Este modelo ofrece diver-

sos beneficios. En primer lugar, este modelo promueve una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, lo que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión económica. En segundo lugar, busca reducir las desigualdades económicas y sociales mediante una distribución más justa de la riqueza y del poder económico. En tercer lugar, promueve la sostenibilidad y la protección ambiental al considerar los impactos ambientales de las decisiones económicas.

Existen varios ejemplos de economía democrática en la práctica. Uno de ellos es la cooperativa, una forma de organización económica en la que los trabajadores también son propietarios de la empresa y participan en la toma de decisiones. Otro es el presupuesto participativo, una práctica en la que los ciudadanos participan en la asignación de recursos públicos mediante un proceso democrático.

Según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en 2018, los modelos económicos más democráticos, como las cooperativas y las empresas propiedad de sus trabajadores, tienen un impacto pos-

itivo en el bienestar de los trabajadores y en la sostenibilidad de las empresas a largo plazo. Al mismo tiempo, un estudio de la Universidad de Harvard de 2017 determinó que los modelos económicos más democráticos son más resilientes ante las crisis económicas y financieras.

Una economía democrática busca una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones económicas y promueve la democratización de la propiedad y del control de los medios de producción. En este marco, la economía democrática se centra en la justicia social, la igualdad y la solidaridad, con el objetivo de superar los problemas tanto del capitalismo como del socialismo, ya que ambos sistemas implican una concentración del poder económico en manos de una élite, ya sea de empresarios o de burócratas.

Entre los beneficios de una economía democrática se encuentran la reducción de las desigualdades económicas, el fomento de la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil, así como la reducción de la explotación laboral. También se espera

que adopte un enfoque más sostenible y orientado al largo plazo, dado que la toma de decisiones está en manos de la sociedad y no de una élite empresarial centrada en maximizar los beneficios a corto plazo.

Uno de los modelos más conocidos de economía democrática es el modelo cooperativo, en el que los trabajadores poseen y controlan colectivamente la empresa. Las cooperativas pueden generar mayores beneficios para los trabajadores y las comunidades en las que están insertas que las empresas tradicionales. Además, las cooperativas tienden a ser más sostenibles y resilientes ante las crisis económicas. Sin embargo, una economía democrática también afronta desafíos, como la necesidad de construir una cultura participativa y un marco jurídico que permita democratizar la propiedad y el control de los medios de producción. La falta de una cultura participativa y de conciencia sobre los beneficios de una economía democrática puede limitar su implementación y su éxito. Del mismo modo, la ausencia de un marco jurídico adecuado puede dificultar la creación y el éxito de empresas democráticas.

El concepto de economía democrática abarca diversas características y principios orientados a promover un sistema económico más inclusivo y justo. A continuación se presentan algunos puntos y citas adicionales para profundizar en este tema:

Toma de decisiones participativa: en una economía democrática, el poder de decisión se distribuye entre diversas partes interesadas, incluidos trabajadores, consumidores y miembros de la comunidad. Este enfoque participativo garantiza que se tenga en cuenta una amplia variedad de perspectivas e intereses. Como afirma el economista Richard Wolff: «La democracia en el trabajo significa permitir que las personas que tienen que vivir con los resultados de las decisiones económicas tengan la misma voz a la hora de tomarlas».

Distribución de la riqueza y justicia económica: uno de los objetivos centrales de una economía democrática es abordar las desigualdades económicas y promover una distribución más justa de la riqueza y los recursos. El economista Gar Alperovitz subraya este punto al afirmar: «Las economías democráticas se

basan en el principio de satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos».

Empoderamiento de los trabajadores: las economías democráticas ponen énfasis en empoderar a los trabajadores y darles una mayor participación en la gestión y la gobernanza de sus lugares de trabajo. La economista Marjorie Kelly destaca la importancia de la propiedad de los trabajadores al afirmar: «La propiedad de los trabajadores es una poderosa vía para democratizar la riqueza y dar a las personas voz y poder en el lugar de trabajo».

Sostenibilidad y consideraciones ambientales: una economía democrática reconoce la interdependencia entre las actividades económicas y el medio ambiente. Busca promover prácticas sostenibles y reducir los impactos ambientales negativos. Como señala el autor y economista E. F. Schumacher: «El objetivo debería ser obtener la máxima cantidad de bienestar con la mínima cantidad de consumo».

Economías locales y comunitarias: las economías democráticas suelen priorizar las iniciativas económi-

cas locales y comunitarias para fomentar la autosuficiencia, la resiliencia y el sentido de pertenencia. El economista Michael Shuman defiende los sistemas económicos descentralizados y afirma: «Las empresas arraigadas localmente tienden a gastar una mayor proporción de su dinero en el ámbito local, creando un círculo virtuoso de desarrollo económico local».

Solidaridad social y cooperación: una economía democrática fomenta la colaboración, la cooperación y el apoyo mutuo entre individuos, empresas y comunidades. La economista Juliet Schor destaca la importancia de las relaciones sociales al afirmar: «En una economía democrática, el capital social es tan importante como el capital financiero».

Resiliencia y adaptabilidad: las economías democráticas están concebidas para ser flexibles y adaptarse a circunstancias cambiantes. Al involucrar a múltiples partes interesadas en la toma de decisiones, pueden responder con mayor eficacia a los desafíos y las crisis económicas. Como afirma el economista David Schweickart: «Las empresas democráticas tienen más

probabilidades de sobrevivir y prosperar porque se benefician de la creatividad y la inteligencia colectiva de sus trabajadores».

En resumen, una economía democrática busca democratizar la propiedad y el control de los medios de producción, con el objetivo de alcanzar una mayor justicia social y reducir las desigualdades económicas. Aunque afronta desafíos, ofrece beneficios en términos de participación ciudadana, sostenibilidad y resiliencia ante las crisis económicas. El modelo cooperativo es uno de los ejemplos más conocidos y exitosos de economía democrática, aunque su implementación y su éxito dependen de una cultura participativa y de un marco jurídico adecuado.

LOS TRES MODELOS COMBINADOS

La combinación de las tres economías —solidaria, circular/regenerativa y democrática— se propone como una alternativa al modelo económico capitalista. La economía solidaria se centra en la cooperación y la solidaridad; la economía circular/regenerativa, en la sostenibilidad ambiental y los ciclos de vida de los productos; y la economía democrática, en la justicia social y la participación ciudadana en la toma de decisiones económicas. Esta combinación puede entenderse como un marco teórico para construir una nueva economía que incorpore los valores y principios de cada una de las tres economías y aspire a una transformación social hacia un sistema más justo y sostenible. Como propuesta integrada, la combinación de estas tres economías podría generar una economía transformadora y revolucionaria que promueva la equidad social y la protección del medio ambiente.

Uno de los principales desafíos de esta integración es crear modelos empresariales y organizativos que se ajusten a los principios de las tres economías. Esto implica aplicar prácticas colaborativas y solidarias dentro de las empresas, adoptar prácticas sostenibles de producción y consumo y promover la participación democrática en la toma de decisiones. Además, esta integración requiere políticas públicas que impulsen la economía solidaria, la economía circular/regenerativa y la economía democrática, y que apoyen el surgimiento y la consolidación de empresas y organizaciones que promuevan estos valores. Entre esas políticas podrían figurar el fomento de la economía social y solidaria en la contratación pública, la aplicación de medidas fiscales para promover la producción y el consumo sostenibles y la creación de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones económicas.

En síntesis, la combinación de las tres economías puede entenderse como una propuesta innovadora y transformadora para construir una nueva economía que incorpore los valores y principios de la solidaridad,

la sostenibilidad ambiental y la democracia. Sin embargo, aún es necesario avanzar en la implementación de modelos empresariales y organizativos que promuevan estos valores y en la creación de políticas públicas que respalden estas iniciativas. Al mismo tiempo, la relación entre estas tres economías puede ser sumamente beneficiosa para crear un modelo económico más sostenible y justo. Por ejemplo, la economía circular/regenerativa puede proporcionar materias primas y energía renovable a la economía solidaria, mientras que la economía democrática puede aportar una gobernanza justa y participativa para coordinar las otras dos economías.

Ya existen diversos ejemplos de proyectos y empresas que aplican esta combinación de economías. Por ejemplo, la cooperativa española Som Energia, centrada en la producción y distribución de energía renovable, cuenta con una estructura democrática y participativa de toma de decisiones e incorpora principios de la economía circular/regenerativa mediante la promoción del autoconsumo y la reducción de residuos. Otro

ejemplo es el proyecto Fairphone, una empresa social que produce teléfonos móviles éticos y sostenibles utilizando materiales reciclados y de comercio justo. Fairphone se orienta hacia la economía solidaria mediante el establecimiento de alianzas con minas cooperativas y fabricantes que aplican criterios de comercio justo, y hacia la economía circular/regenerativa mediante la promoción del reciclaje y la reutilización de sus productos.

La integración de estas tres economías puede ofrecer una alternativa sostenible y justa al actual modelo económico capitalista. Al fomentar la colaboración y la coordinación entre ellas, es posible crear soluciones integrales a los desafíos sociales y ambientales y promover un enfoque de la economía más centrado en las personas y más participativo. En este sentido, diversos estudios y artículos académicos han explorado los beneficios y las posibilidades de combinar estas tres economías. Por ejemplo, en un artículo publicado en la revista *Sustainability*, los autores sostienen que integrar los enfoques económicos solidario, circular/regen-

erativo y democrático puede facilitar la transición hacia un sistema económico más sostenible y justo. También destacan que la colaboración y el diálogo intersectorial pueden ser fundamentales para crear un enfoque integral y coherente de estas economías. Otro artículo publicado en la revista *Ecological Economics* sostiene que la economía circular y regenerativa puede ofrecer una oportunidad para promover la economía solidaria mediante el apoyo a empresas locales y el impulso de la producción y el consumo locales y sostenibles de alimentos. Además, los autores señalan que la economía democrática puede proporcionar una estructura participativa y justa para gestionar y coordinar estas economías.

Diversos proyectos y empresas ya están aplicando esta integración de economías. Por ejemplo, la cooperativa española Som Energia se dedica a la producción y distribución de energía renovable, cuenta con una estructura democrática y participativa de toma de decisiones y promueve los principios de la economía circu-

lar y regenerativa mediante el autoconsumo y la reducción de residuos.

La transición hacia un modelo económico integrado que combine principios de las economías solidaria, circular/regenerativa y democrática puede ser un proceso ordenado y de amplia base si se tienen en cuenta ciertos elementos clave. Las siguientes son posibles estrategias para dicha transición:

Fomentar la educación y la sensibilización: es fundamental promover la educación y la sensibilización sobre las ventajas y posibilidades de combinar estas tres economías. Esto incluye impulsar proyectos educativos, sensibilizar a la sociedad y establecer redes de colaboración entre distintas iniciativas.

Apoyar las iniciativas y proyectos existentes: es importante respaldar las iniciativas y proyectos que ya están aplicando esta combinación de economías. Esto incluye promover políticas públicas que fomenten prácticas económicas solidarias, circulares/regenerativas y democráticas, así como crear programas específicos de financiación y capacitación para estas iniciativas.

Fomentar la colaboración entre sectores: la colaboración entre distintos sectores, incluidas las empresas, el gobierno, la sociedad civil y el ámbito académico, puede ser decisiva para crear un enfoque integrado y coherente de estas economías. Esto implica promover la participación y el diálogo entre los diversos actores involucrados.

Promover la innovación y el emprendimiento social: es importante fomentar la innovación y el emprendimiento social para crear soluciones sostenibles y justas a los desafíos sociales y ambientales. Esto incluye ofrecer oportunidades de incubación y aceleración para proyectos innovadores y apoyar a los emprendedores sociales.

Fortalecer la gobernanza participativa: una gobernanza participativa y justa puede ser fundamental para coordinar y gestionar eficazmente estas economías combinadas. Esto incluye promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

En conclusión, una transición ordenada y de amplia base hacia un modelo económico integrado que combine principios de las economías solidaria, circular/regenerativa y democrática puede ser viable si incorpora elementos clave como la educación y la sensibilización, el apoyo a las iniciativas existentes, la colaboración entre sectores, la promoción de la innovación y el emprendimiento social y el fortalecimiento de la gobernanza participativa.

NUEVO MODELO ECONÓMICO

La economía mundial actual afronta desafíos significativos, entre ellos el aumento de la desigualdad económica y la pobreza extrema en muchas partes del mundo. El capitalismo, como sistema económico dominante, ha sido criticado por su incapacidad para abordar estos problemas y por generar desequilibrios en la distribución de la riqueza y del poder económico.

Una posible solución a estos problemas es la implementación de una nueva economía justa que se centre en la equidad y la justicia social, en lugar de perseguir el crecimiento económico a cualquier costo. Esta economía se basa en la idea de que la economía debe estar al servicio de la sociedad y no al contrario.

La nueva economía justa implica una serie de cambios importantes en la forma en que se organizan y gestionan los sistemas económicos. En primer lugar, se necesita una redistribución más justa de la riqueza y de

los ingresos para que las personas más ricas y poderosas no ejerzan un control desproporcionado sobre los recursos económicos. El primer ámbito en el que debe centrarse la transición hacia una nueva economía justa es el establecimiento de un sistema tributario justo y progresivo.

Actualmente, en muchos países, las políticas fiscales favorecen a los sectores más ricos de la sociedad, mientras que los trabajadores y la clase media soportan una carga tributaria desproporcionada. Esto se debe en gran medida a la influencia de los grupos de presión empresariales sobre las políticas fiscales y económicas, que han logrado implantar exenciones tributarias y otras políticas que benefician principalmente a las grandes corporaciones y a las personas ricas.

Para revertir esta situación, debe establecerse un sistema tributario justo que grave a las personas de acuerdo con su capacidad de pago. Una forma de hacerlo es mediante impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, cuyas tasas aumenten a medida que crecen los ingresos y el patrimonio. Además, deben revisarse

las políticas fiscales para eliminar las exenciones y reducciones tributarias que actualmente benefician a las grandes corporaciones y a los ricos.

Un ejemplo de política fiscal progresiva puede encontrarse en los países escandinavos, donde se aplican impuestos elevados sobre la renta y la riqueza y, al mismo tiempo, se ofrece una amplia gama de servicios públicos gratuitos o de costo reducido, como educación, atención sanitaria, transporte y vivienda. Esto permite que las personas con menores ingresos accedan a estos servicios de manera equitativa, reduciendo así las desigualdades sociales y promoviendo la movilidad social.

Otro ejemplo de política fiscal justa y equitativa es la tasa Tobin, que consiste en aplicar un pequeño impuesto a las transacciones financieras internacionales. Esto podría generar ingresos significativos para el desarrollo de políticas sociales y ambientales. Sin embargo, este tipo de impuesto todavía no se ha implementado a escala mundial debido a la oposición de los sectores más poderosos del mundo financiero.

La creación de un sistema tributario justo y progresivo es un primer paso crucial para alcanzar una economía más equitativa y justa, que reduzca las desigualdades sociales y promueva la movilidad social. Esto requerirá la aplicación de políticas fiscales más justas y la eliminación de las exenciones tributarias que benefician a los ricos y a las grandes corporaciones, así como nuevas medidas fiscales para financiar servicios públicos y políticas sociales en beneficio de la sociedad.

En segundo lugar, la nueva economía justa se centra en la creación de empleos de calidad y en la promoción del emprendimiento social. Esto implica fomentar la creación de empresas comprometidas con la justicia social y el bienestar de la comunidad, en lugar de centrarse exclusivamente en maximizar los beneficios.

El cuarto punto es la necesidad de una regulación más estricta de las empresas y los mercados. El capitalismo del siglo XXI debe regularse para garantizar que las empresas y los mercados no operen a costa de las personas y del medio ambiente. Esto puede lograrse mediante políticas gubernamentales que promuevan la re-

sponsabilidad social empresarial y la sostenibilidad ambiental.

Es importante que las empresas sean socialmente responsables y tengan en cuenta los impactos sociales y ambientales de sus actividades. Esto significa ir más allá de la generación de beneficios y considerar cómo afectan sus acciones a la sociedad y al medio ambiente. Las empresas deben ser transparentes y rendir cuentas por sus acciones, y se les debe exigir el cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales.

Los mercados deben regularse para evitar abusos y excesos. Las regulaciones deberían incluir medidas destinadas a impedir la monopolización y la concentración excesiva del poder económico, así como a proteger a consumidores y trabajadores frente a la explotación y los abusos. Del mismo modo, las regulaciones deberían promover una competencia justa y prevenir la corrupción y la manipulación de los mercados.

La regulación también debería promover la sostenibilidad ambiental. Las empresas y los mercados deben regularse para garantizar que no dañen el medio

ambiente y para incentivar la adopción de prácticas sostenibles. Esto incluye medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los ecosistemas naturales y disminuir el consumo de recursos. En resumen, la regulación es esencial para garantizar que las empresas y los mercados operen de manera justa y responsable. Puede contribuir a prevenir abusos y excesos, proteger a consumidores y trabajadores y promover la sostenibilidad ambiental. El capitalismo del siglo XXI debe regularse para asegurar que beneficie a todos, y no solo a unos pocos privilegiados.

La explotación laboral debe terminar y deben garantizarse derechos laborales básicos para todos los trabajadores, entre ellos un salario digno y condiciones de trabajo seguras y saludables. El tercer punto de la nueva teoría económica que proponemos se centra en la importancia de una redistribución justa de la riqueza. Como se mencionó anteriormente, la desigualdad económica es un problema significativo en todo el mundo y ha aumentado en muchos países durante las últimas décadas. Para abordar este problema,

es esencial aplicar políticas fiscales y económicas que promuevan una redistribución justa de la riqueza. Una forma de lograrlo es mediante impuestos progresivos, que establecen tasas tributarias más elevadas para las personas ricas y las corporaciones que para las personas y empresas de bajos ingresos. Al mismo tiempo, las políticas de gasto público pueden apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad mediante la educación, la atención sanitaria, la vivienda y otros servicios esenciales.

También es importante abordar las disparidades salariales y garantizar que los trabajadores reciban un salario justo y digno por su trabajo. En muchos países, los trabajadores de bajos ingresos y quienes se encuentran en empleos precarios reciben salarios muy inferiores al salario mínimo y no tienen acceso a prestaciones laborales básicas, como seguro médico y vacaciones pagadas. Esto perpetúa la desigualdad y la pobreza, por lo que es esencial abordar estas disparidades salariales. Además de una redistribución justa de la riqueza, también es importante abordar la brecha de género y la dis-

criminación económica que sufren las minorías y las comunidades marginadas. En muchos países, las mujeres y las minorías étnicas y raciales presentan tasas más elevadas de pobreza y desigualdad económica debido a la discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la vivienda. Por lo tanto, es importante aplicar políticas que aborden estas disparidades y promuevan la igualdad económica. El tercer punto de la nueva teoría económica que proponemos se centra en la importancia de una redistribución justa de la riqueza, en abordar las disparidades salariales, la brecha de género y la discriminación económica. Para lograrlo, es esencial implementar políticas fiscales y económicas que promuevan una redistribución justa de la riqueza y la igualdad económica.

La nueva economía justa se centra en la sostenibilidad ambiental y la protección del medio ambiente. Esto implica promover prácticas empresariales y de consumo respetuosas con el medio ambiente y que reduzcan la huella de carbono y otros impactos negativos sobre el entorno. El segundo punto pone énfasis en el uso

de nuevas tecnologías y formas de organización empresarial que permitan una mayor eficiencia y productividad y, al mismo tiempo, reduzcan el impacto ambiental negativo de las actividades económicas. Actualmente existen diversas tecnologías y prácticas empresariales que pueden contribuir a alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, la implementación de sistemas de producción más eficientes, como la fabricación justo a tiempo, puede reducir los costos de producción y minimizar la generación de residuos. Del mismo modo, la adopción de tecnologías limpias, como la energía solar o eólica, puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo de una tecnología capaz de mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental es la agricultura de precisión, que utiliza sensores y sistemas de información geográfica para supervisar y optimizar el uso de fertilizantes, agua y otros recursos. Esto puede reducir la contaminación del agua y del suelo, aumentar la productividad y disminuir los costos de producción.

En cuanto a la organización empresarial, el modelo B Corporation, también conocido como benefit corporation, ofrece una alternativa que busca combinar la rentabilidad económica con la responsabilidad social y ambiental. Estas empresas procuran maximizar su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente al mismo tiempo que generan beneficios económicos para sus accionistas. Se basan en prácticas de gestión éticas y transparentes y miden el éxito no solo por las ganancias financieras, sino también por su impacto social y ambiental.

El uso de nuevas tecnologías y formas de organización empresarial puede contribuir a lograr una mayor eficiencia y productividad, reducir el impacto ambiental de las actividades económicas y fomentar la responsabilidad social empresarial.

La nueva teoría económica se centra en la importancia de la educación y el desarrollo humano para el crecimiento económico. La educación no solo es un derecho humano fundamental, sino también un factor clave para el crecimiento económico y la reducción de

la pobreza. Invertir en educación y desarrollo humano no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también aumenta la productividad y la innovación, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico. Para comprender la importancia de la educación en el crecimiento económico, podemos examinar países como Corea del Sur y Singapur. Ambos pasaron de economías agrarias a economías avanzadas en unas pocas décadas, y gran parte de su éxito se atribuye a la inversión en educación y desarrollo humano.

En Corea del Sur, el gobierno invirtió en la educación de la población y promovió el acceso a la educación superior, lo que condujo a un aumento de la productividad y la innovación en sectores clave como la tecnología y la fabricación de automóviles. En Singapur se implantó un sistema educativo de alta calidad, con especial énfasis en la ciencia, las matemáticas y la tecnología, lo que ayudó a transformar el país en un centro de innovación y tecnología en Asia. Además de mejorar la productividad y la innovación, la educación y el desarrollo humano también pueden con-

tribuir a reducir la desigualdad y la pobreza. Los estudios han demostrado que la educación puede ser un factor crucial para reducir la pobreza al mejorar las oportunidades de empleo y aumentar los ingresos de las personas. También puede promover la igualdad de género y reducir la discriminación racial y étnica, mejorando así la cohesión social y el bienestar general. En resumen, el sexto punto de la nueva teoría económica destaca la importancia de la educación y el desarrollo humano para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Invertir en educación no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también aumenta la productividad y la innovación, impulsando el crecimiento económico y la competitividad global. Al mismo tiempo, puede contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza al mejorar las oportunidades de empleo y aumentar los ingresos de las personas, además de promover la igualdad de género y la cohesión social. La nueva economía justa ofrece una alternativa práctica al capitalismo y a su enfoque en el crecimiento económico incesante. Si se implementan los cambios necesarios,

esta economía puede contribuir de manera significativa a reducir la desigualdad y la pobreza, crear empleos de calidad y proteger el medio ambiente. La nueva economía justa no es una utopía, sino una solución práctica y necesaria a los desafíos económicos y sociales del mundo actual.

La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico es otro aspecto de la nueva economía justa. La nueva economía justa debería estar impulsada por la innovación continua y el uso de tecnologías avanzadas para crear productos y servicios más eficientes, sostenibles y accesibles para la población. Esto implica no solo fomentar la investigación y el desarrollo en áreas clave como la energía, la salud, la agricultura y la industria, sino también garantizar que las tecnologías sean accesibles y se utilicen en beneficio de la sociedad.

Un ejemplo de ello es el uso de tecnologías digitales para democratizar el acceso a la educación y la capacitación. En muchos países, la educación sigue siendo inaccesible para amplios sectores de la población debido a barreras económicas, geográficas o culturales.

La nueva economía justa debería promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para superar estas barreras mediante el desarrollo de plataformas de educación en línea, programas de capacitación virtual y herramientas digitales para acceder a la información. De este modo, puede garantizarse que todas las personas tengan acceso a la educación y la formación necesarias para participar en la economía y contribuir al desarrollo sostenible.

Otro ejemplo de innovación en la nueva economía justa es la implementación de tecnologías limpias y renovables en la producción y el consumo de energía. La transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles es esencial para combatir el cambio climático y garantizar un futuro habitable para las generaciones venideras. Además, la adopción de tecnologías limpias y renovables puede reducir los costos energéticos a largo plazo y crear nuevas oportunidades de empleo en el sector energético.

La nueva teoría económica justa propone la implementación de políticas fiscales progresivas para garanti-

zar la redistribución de la riqueza y reducir la desigualdad económica. En muchos países, las políticas fiscales han sido diseñadas para beneficiar a las grandes corporaciones y a las personas más ricas, lo que ha provocado una mayor concentración de la riqueza en manos de unos pocos. La nueva teoría económica justa propone reformas fiscales orientadas a redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad, con medidas como las siguientes:

Aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones: los impuestos progresivos pueden contribuir a reducir la desigualdad y financiar programas de bienestar social que beneficien a toda la población. Puede considerarse la implementación de un impuesto sobre el patrimonio o de un impuesto a las transacciones financieras para aumentar los ingresos fiscales y reducir la especulación financiera.

Reducir los impuestos a los trabajadores y las pequeñas empresas: las reducciones fiscales para las personas de bajos ingresos y las pequeñas empresas pueden aumentar el poder adquisitivo y la capacidad de in-

versión, estimulando el crecimiento económico y reduciendo la desigualdad.

Eliminar las exenciones fiscales injustas: muchas grandes corporaciones y personas ricas reciben exenciones fiscales que les permiten pagar menos impuestos de los que deberían. Eliminar estas exenciones puede aumentar los ingresos fiscales y reducir la desigualdad.

Implementar una reforma fiscal global: muchos países cuentan con políticas fiscales que permiten la evasión tributaria y la transferencia de riqueza hacia paraísos fiscales. Implementar una reforma fiscal global puede ayudar a combatir la evasión tributaria y garantizar que todas las empresas y personas paguen impuestos justos.

Utilizar los ingresos fiscales para programas de bienestar social: los ingresos fiscales adicionales pueden emplearse para financiar programas de bienestar social, como educación, atención sanitaria y vivienda, beneficiando a toda la población y reduciendo la desigualdad.

La implementación de políticas fiscales progresivas puede ayudar a reducir la desigualdad y garantizar una

distribución más justa de la riqueza. Sin embargo, es importante que estas políticas se apliquen de manera justa y equitativa para evitar efectos negativos sobre la economía y la sociedad.

También es crucial fomentar la innovación y la investigación en las empresas. En el modelo económico actual, las empresas suelen priorizar la maximización de beneficios a corto plazo por encima de la inversión en innovación y desarrollo a largo plazo. Esto puede conducir a una pérdida de competitividad en el mercado mundial y a una menor capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda de los consumidores y a las nuevas tecnologías.

Para fomentar la innovación, es importante que las empresas cuenten con incentivos adecuados, como créditos fiscales, subsidios y apoyo gubernamental a la investigación y el desarrollo. Además, las empresas pueden promover la innovación mediante la creación de una cultura empresarial que fomente la experimentación y el aprendizaje continuo.

Un ejemplo de empresa que ha fomentado la innovación es Google. La compañía ha establecido una cultura de trabajo que promueve la experimentación y la creatividad, lo que ha conducido a la creación de productos como Google Maps, Google Glass y Google Translate. Además, Google ha invertido en proyectos de investigación y desarrollo en áreas como la inteligencia artificial y la energía renovable.

Otro ejemplo es Tesla, que se ha centrado en la innovación en el campo de los vehículos eléctricos y las baterías. La empresa ha invertido en investigación y en el desarrollo de tecnologías innovadoras y ha utilizado la innovación para crear productos sostenibles que satisfacen las necesidades de los consumidores. El punto diez de la nueva teoría económica propone una transformación de la estructura de las empresas para otorgar mayor poder y participación a los trabajadores. Esto se basa en la idea de que los trabajadores son una parte esencial de la empresa y de que sus voces y experiencia deben valorarse en la toma de decisiones. Una forma de lograrlo es mediante la implementación de modelos co-

operativos de propiedad y gestión. En este tipo de empresas, los trabajadores comparten la propiedad y participan en la gestión. Esto les permite tomar decisiones importantes y tener una mayor autonomía en el lugar de trabajo, lo que puede aumentar su satisfacción y su compromiso con el trabajo. Además, los modelos cooperativos pueden beneficiar a la economía porque están diseñados para ser más justos y sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, las cooperativas pueden centrarse en el crecimiento sostenible y en la reinversión de los beneficios, en lugar de maximizar los rendimientos para propietarios individuales. Otro enfoque para aumentar la participación de los trabajadores consiste en implementar programas de reparto de beneficios y de propiedad de los empleados. Esto significa que los trabajadores reciben una parte de los beneficios y pueden poseer una participación en la empresa. Esta estrategia puede aumentar la motivación y el compromiso de los trabajadores y mejorar su lealtad y retención.

Transformar la estructura de las empresas para otorgar mayor poder y participación a los trabajadores

es una propuesta clave de la nueva teoría económica. Esto puede lograrse mediante modelos cooperativos y programas de reparto de beneficios y de propiedad de los empleados. Además de mejorar la satisfacción y el compromiso de los trabajadores, estos modelos también pueden ser más justos y sostenibles a largo plazo para la economía en su conjunto. El punto once destaca la necesidad de modificar el enfoque de la educación, pasando de un modelo centrado en el conocimiento y la información a otro que haga hincapié en el desarrollo de habilidades y competencias. Esto requiere revisar los programas educativos y los métodos de enseñanza. Actualmente, muchos sistemas educativos se centran en la transmisión de conocimientos teóricos, que pueden quedar obsoletos en un mundo en constante cambio y evolución. Por lo tanto, es necesario modificar el enfoque educativo para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades prácticas y competencias que les permitan adaptarse a un mundo en permanente transformación. Para lograr este cambio, se necesita una mayor colaboración entre las empresas y las instituciones ed-

ucativas a fin de identificar las habilidades y competencias más demandadas en el mercado laboral. También es importante fomentar la creatividad y la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes, lo que puede lograrse mediante técnicas de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación. Otro aspecto importante en este sentido es la necesidad de una educación más inclusiva que permita a todos los estudiantes desarrollar su potencial, con independencia de su origen socioeconómico o cultural. Esto implica eliminar las barreras de acceso a la educación y crear entornos educativos que promuevan la inclusión y la diversidad.

El punto doce de la nueva teoría económica propone la creación de una nueva institución financiera internacional centrada en el desarrollo económico sostenible y la reducción de la desigualdad mundial. El objetivo principal de esta institución sería financiar proyectos que promuevan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Para alcanzar este objetivo, la nueva institución fi-

nanciera debería contar con el respaldo de múltiples países y disponer de una sólida base de financiación. Del mismo modo, sería necesario establecer criterios claros y rigurosos para seleccionar los proyectos financiados y garantizar que los recursos se distribuyan de manera eficaz y eficiente. Una de las principales ventajas de esta institución sería la posibilidad de proporcionar una fuente de financiación estable y confiable para los países en desarrollo, permitiéndoles reducir su dependencia de instituciones financieras internacionales tradicionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, esta nueva institución podría centrarse en proyectos específicos, como el desarrollo de infraestructura, la educación o la salud, lo que permitiría adoptar un enfoque más preciso y eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad. Por otra parte, es importante señalar que la creación de una nueva institución financiera internacional no estaría exenta de desafíos y riesgos. En primer lugar, sería necesario establecer mecanismos eficaces de gobernanza y supervisión para garantizar la transparen-

cia y la rendición de cuentas en la asignación de recursos. También es importante tener en cuenta que la creación de una nueva institución financiera podría generar tensiones con las instituciones financieras internacionales existentes, lo que podría dificultar la cooperación y la colaboración en materia de desarrollo económico. El punto trece propone que la nueva teoría económica se base en una ética de responsabilidad social y ambiental. Esto es extremadamente importante para el futuro de la economía y para el bienestar humano en general. Actualmente, muchas empresas y economías se centran exclusivamente en maximizar los beneficios y minimizar los costos, sin considerar el impacto social y ambiental de sus actividades. Esto ha provocado explotación laboral, degradación ambiental y desigualdad económica. Una teoría económica basada en una ética de responsabilidad social y ambiental aborda estos problemas y busca equilibrar los intereses económicos con los sociales y ambientales. Esto significa que las empresas y los gobiernos deben considerar no solo el impacto económico de sus actividades,

sino también su impacto social y ambiental. Por ejemplo, una empresa que fabrique un producto debería garantizar que sus trabajadores reciban salarios justos y trabajen en condiciones seguras, al tiempo que minimiza el impacto ambiental de sus procesos de producción. Del mismo modo, los gobiernos deberían tomar decisiones económicas que tengan en cuenta los impactos sociales y ambientales, en lugar de centrarse únicamente en maximizar el crecimiento económico. Una teoría económica basada en una ética de responsabilidad social y ambiental también reconoce la importancia de la equidad y la justicia social. Esto significa que la distribución de la riqueza y los recursos debe ser justa y equitativa para todos los miembros de la sociedad, no solo para una élite privilegiada. El punto catorce de la nueva teoría económica propone la creación de un sistema de protección social eficaz y justo para todos los ciudadanos. Este sistema debería basarse en una redistribución justa de la riqueza y garantizar el acceso a servicios básicos como atención sanitaria, educación, vivienda y alimentación. Actualmente, muchos países

han avanzado en la creación de sistemas eficaces de protección social, como los países escandinavos, donde las políticas públicas garantizan el acceso universal a los servicios básicos. Sin embargo, en muchos otros países, especialmente aquellos con altos niveles de desigualdad económica, la implementación de un sistema de protección social justo y eficaz sigue siendo un desafío. Para alcanzar este objetivo, el Estado debe desempeñar un papel fundamental en la creación y administración de este sistema de protección social. Esto implica una inversión significativa en recursos financieros y humanos, así como una planificación estratégica para garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. También es importante garantizar la participación e inclusión de todos los ciudadanos en el diseño y la implementación de este sistema de protección social. Esto incluye escuchar y tener en cuenta las necesidades y perspectivas de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las minorías étnicas. No puede subestimarse la importancia de crear un

sistema de protección social eficaz y justo para todos los ciudadanos que garantice el acceso a servicios básicos y reduzca la desigualdad económica. Para lograr este objetivo, es necesario que el Estado desempeñe un papel fundamental en la creación y administración de este sistema y que garantice la participación e inclusión de todos los ciudadanos en su diseño e implementación.

El punto dieciséis de la nueva teoría económica propone la implementación de una educación financiera eficaz. La educación financiera se refiere a la enseñanza de conceptos y herramientas relacionados con la gestión de las finanzas personales y empresariales, y es esencial para tomar decisiones informadas y responsables en el ámbito financiero. Una educación financiera eficaz debe ser accesible para todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico o educativo. Esto implica que el sistema educativo debería incorporar programas de educación financiera desde la educación básica hasta la educación superior. Además, la educación financiera debe ser práctica y

aplicable a situaciones de la vida real, centrándose en el desarrollo de habilidades financieras y no en la mera memorización de conceptos teóricos. Los programas de educación financiera deberían incluir ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes aplicar lo aprendido a situaciones reales, como la elaboración de presupuestos, la planificación financiera y la inversión. Otro aspecto importante de la educación financiera es su enfoque en la ética y la responsabilidad social. La educación financiera debería enseñar no solo una adecuada gestión del dinero, sino también el impacto de las decisiones financieras en el contexto social y ambiental.

La educación financiera es crucial porque permite a las personas tomar decisiones informadas y responsables sobre sus finanzas personales. Sin embargo, en muchos casos, la educación financiera no se imparte de manera eficaz, lo que puede limitar su impacto y utilidad. Para lograr una educación financiera eficaz, es necesario adoptar un enfoque integral que incluya tanto la enseñanza de conceptos financieros básicos como la práctica de habilidades financieras. Una forma de

hacerlo es mediante la implementación de un plan de educación financiera centrado en los siguientes puntos clave:

Evaluación de necesidades: antes de enseñar habilidades financieras, es importante evaluar las necesidades de los estudiantes o participantes. Esto puede incluir identificar lagunas de conocimiento, comprender los objetivos financieros de los participantes e identificar los mejores enfoques para ayudarlos a alcanzar esos objetivos.

Selección de contenidos: una vez evaluadas las necesidades, es importante seleccionar los contenidos que se enseñarán. Los contenidos deben adaptarse al nivel de conocimientos y experiencia de los participantes y ser pertinentes para sus necesidades y objetivos financieros.

Enseñanza de habilidades financieras prácticas: además de enseñar conceptos financieros básicos, es importante enseñar habilidades financieras prácticas que los participantes puedan aplicar en la vida real. Es-

to puede incluir enseñarles a elaborar un presupuesto, ahorrar e invertir.

Evaluación y seguimiento: es importante evaluar la eficacia del programa de educación financiera y realizar un seguimiento de los participantes para determinar si han alcanzado sus objetivos financieros. Esto puede ayudar a identificar áreas de mejora y perfeccionar el programa en el futuro.

Participación de la comunidad: para lograr una educación financiera eficaz, es importante involucrar a la comunidad en la enseñanza de habilidades financieras. Esto puede incluir la colaboración con organizaciones comunitarias y la creación de redes de apoyo que ayuden a los participantes a alcanzar sus objetivos financieros.

Para lograr una educación financiera eficaz es necesario adoptar un enfoque integral que incluya la evaluación de necesidades, la selección adecuada de contenidos, la enseñanza de habilidades financieras prácticas, la evaluación y el seguimiento y la participación de la comunidad. Este enfoque puede proporcionar a

los participantes las herramientas y los conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras informadas y responsables en la vida real.

Como afirma John Hope Bryant:

«Una educación financiera eficaz es un componente clave para el éxito financiero y la estabilidad económica. Las personas necesitan comprender cómo funciona el sistema financiero, tomar decisiones financieras informadas y protegerse frente al fraude y la explotación financiera. La educación financiera puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas». —John Hope Bryant, fundador y director ejecutivo de Operation HOPE.

El punto diecisiete aborda la necesidad de una mayor colaboración internacional en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, especialmente por parte de las grandes corporaciones. En este sentido, es nece-

sario fortalecer la cooperación internacional para intercambiar información fiscal entre países y garantizar que las grandes corporaciones no eludan sus responsabilidades tributarias en los países donde operan. La falta de cooperación internacional en este ámbito ha permitido que algunas empresas multinacionales evadan impuestos en los países donde operan mediante la transferencia de sus beneficios a países con tipos impositivos más bajos o incluso a paraísos fiscales. Esto tiene un impacto negativo en la economía y en la capacidad de los países para financiar programas sociales y de desarrollo. Para abordar este problema, es necesario fortalecer la cooperación internacional y crear mecanismos de transparencia fiscal que permitan a los países conocer mejor las operaciones de las empresas multinacionales y garantizar que paguen una cantidad justa de impuestos en cada país donde operan. Esto puede incluir la creación de acuerdos internacionales, como los convenios para evitar la doble imposición, y el establecimiento de mecanismos de intercambio de información entre las autoridades tributarias de distintos país-

es. Además, pueden explorarse mecanismos para incentivar a las empresas a cumplir sus obligaciones fiscales, como la creación de incentivos tributarios para aquellas que demuestren un compromiso con la transparencia fiscal y el pago justo de impuestos. El plan de acción para una mayor colaboración internacional en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal incluiría medidas como el intercambio automático de información tributaria entre países, la adopción de normas internacionales de transparencia fiscal y la creación de mecanismos para prevenir la planificación fiscal agresiva. Un ejemplo de cómo se han aplicado este tipo de medidas es el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, adoptado por más de 140 países y que permite el intercambio automático de información tributaria entre las autoridades fiscales de distintos países. También existen iniciativas como la Iniciativa de Transparencia sobre la Titularidad Real impulsada por el G20, cuyo objetivo es garantizar la transparencia sobre los verdaderos propietarios de las empresas y prevenir la evasión fiscal y el lavado

de dinero. El punto dieciocho del plan tiene como objetivo promover la innovación y la investigación y el desarrollo (I+D) para apoyar la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada. En este sentido, es importante promover políticas y estrategias que fomenten la innovación en el sector privado, especialmente en la industria, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética. Para alcanzar este objetivo, pueden establecerse incentivos fiscales y financieros para las empresas que inviertan en tecnologías limpias y sostenibles, así como para aquellas que lleven a cabo proyectos de investigación y desarrollo en este ámbito. Del mismo modo, pueden establecerse alianzas entre los sectores público y privado para promover la innovación y la I+D en tecnologías limpias y sostenibles. Otro aspecto importante para fomentar la innovación y la investigación es fortalecer el sistema educativo en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Pueden implementarse políticas y programas para promover la educación STEM desde edades

tempranas, con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados que puedan contribuir al desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles. Por último, es importante fomentar la colaboración internacional en el ámbito de la innovación y la I+D. Pueden establecerse acuerdos y alianzas entre países para compartir conocimientos, recursos y tecnologías que permitan avanzar hacia una economía sostenible y descarbonizada. Al mismo tiempo, pueden establecerse redes de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación de distintos países para impulsar la innovación en tecnologías limpias y sostenibles. La evidencia cuantitativa respalda la importancia de la inversión en I+D para el crecimiento económico. Por ejemplo, un informe de la Comisión Europea encontró una fuerte correlación entre la inversión en I+D y el crecimiento económico, indicando que un aumento del 1 % en la inversión en I+D puede elevar el PIB per cápita en un 0,03 %. Además, otro estudio encontró que los países que invierten más en I+D tienden a pre-

sentar una mayor productividad y tasas de desempleo más bajas.

El punto diecinueve del plan de acción se centra en la implementación de políticas de protección ambiental y de lucha contra el cambio climático. El objetivo es avanzar hacia un desarrollo sostenible y un futuro más verde y limpio. Una de las medidas propuestas es la implementación de incentivos fiscales y financieros para las empresas que adopten prácticas sostenibles y reduzcan su huella de carbono. Esto podría incluir reducciones fiscales para las empresas que utilicen energías renovables o reduzcan su consumo energético, así como préstamos a tasas preferenciales para inversiones en tecnologías sostenibles. También se propone un marco regulatorio que promueva la transparencia y la divulgación de información ambiental y social por parte de las empresas. Esto permitiría a consumidores e inversores tomar decisiones mejor informadas y fomentaría la competencia entre empresas en materia de sostenibilidad. Otras medidas que podrían implementarse incluyen la promoción del transporte público y

de medios de transporte más sostenibles, como las bicicletas y los vehículos eléctricos, así como prácticas agrícolas más sostenibles y la economía circular. Es importante señalar que la implementación de estas medidas no solo tendría un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también podría generar empleos verdes y contribuir al desarrollo económico a largo plazo. Asimismo, dado que se trata de un problema global, la cooperación y la colaboración internacionales son esenciales para lograr un cambio significativo.

El punto veinte del plan de acción aborda la diversidad cultural. Una fuente de evidencia cuantitativa sobre su importancia es la World Values Survey, que se realiza en más de cien países desde la década de 1980. Según los datos de la encuesta, existe una correlación positiva entre la diversidad cultural y la tolerancia hacia la diversidad. Por ejemplo, un estudio realizado en ochenta y un países encontró que aquellos con mayor diversidad cultural también presentaban niveles más altos de tolerancia hacia la inmigración y las diferencias religiosas y étnicas (Inglehart & Norris, 2016).

Además, otros estudios han encontrado que la diversidad cultural se correlaciona positivamente con la innovación y el crecimiento económico (Alesina & La Ferrara, 2005). Un informe de 2015 de McKinsey & Company encontró que las empresas con mayor diversidad racial y étnica tenían un 35 % más de probabilidades de superar a las empresas con menor diversidad en términos de desempeño financiero. Del mismo modo, otro estudio de 2015 del Institute for Diversity and Ethics in Business encontró que la diversidad de género se correlaciona positivamente con la rentabilidad empresarial. En este estudio se analizaron más de 20.000 empresas de todo el mundo y se encontró que las empresas con una mayor proporción de mujeres en sus consejos de administración presentaban un desempeño financiero un 36 % superior al de las empresas con menos mujeres en sus consejos (Catalyst, 2015). Estos son solo algunos ejemplos de cómo la diversidad cultural puede tener un impacto positivo en la sociedad y la economía. Es importante señalar que la diversidad cultural no es únicamente una cuestión de justicia

social, sino que también puede constituir una ventaja competitiva en el mundo empresarial.

CONCLUSIONES

La transición de la actual economía capitalista hacia una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática es un proceso complejo que requiere un plan de acción detallado y bien estructurado. A continuación se presenta un posible plan de acción para llevar a cabo esta transición:

Cambio de los supuestos básicos: el primer paso hacia la transición a una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática consiste en cambiar los supuestos básicos, pasando de una mentalidad capitalista a otra centrada en la sostenibilidad y la solidaridad. Esto implica cambiar la manera en que se perciben los recursos naturales, el trabajo, el consumo y la propiedad. Este cambio de pensamiento es crucial para la transición hacia una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática. La mentalidad capitalista se centra en la maximización de los beneficios y el crecimiento económico a corto plazo, lo que ha conducido

a la explotación de los recursos naturales y al aumento de la desigualdad social. Por lo tanto, es necesario cambiar la forma en que se conciben los recursos naturales, el trabajo, el consumo y la propiedad. En una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática, los recursos naturales se valoran y protegen, el trabajo se valora como un bien común, el consumo se basa en la calidad más que en la cantidad y la propiedad es colectiva y participativa.

Desarrollo de una estrategia global: es necesario desarrollar una estrategia global que involucre a todos los países y a todos los actores sociales y económicos, desde las empresas y los gobiernos hasta las comunidades y los ciudadanos. Esta estrategia debe establecer objetivos claros y medibles para la transición hacia una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática. La estrategia debe involucrar a todos los actores económicos y sociales. Además, debe diseñarse de manera participativa y tener en cuenta las necesidades y realidades específicas de cada país y comunidad.

Apoyo a la innovación social y al emprendimiento: la innovación social y el emprendimiento son cruciales para la transición hacia una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática. Se debe apoyar a los emprendedores y a las empresas sociales que buscan soluciones innovadoras a los problemas sociales y ambientales. Estas iniciativas se centran en la creación de valor compartido y también pueden generar empleo y fomentar un desarrollo económico sostenible.

Promoción de la economía circular: la economía circular se basa en la reutilización, la reparación y el reciclaje de productos y materiales, lo que reduce los residuos y la demanda de materias primas. Debe promoverse mediante políticas públicas y programas de incentivos. Este modelo puede tener un impacto positivo sobre el medio ambiente y, al mismo tiempo, fomentar la innovación y la colaboración entre los distintos actores económicos y sociales.

Fomento de la cooperación y la colaboración: la cooperación y la colaboración son cruciales para la transición hacia una economía solidaria, circular, re-

generativa y democrática. Debe fomentarse la cooperación entre empresas, comunidades y ciudadanos, así como promoverse la colaboración entre los distintos actores económicos y sociales. Estas prácticas favorecen la creación de redes y alianzas que pueden aumentar la eficiencia y la innovación. Además, la cooperación y la colaboración pueden promover la solidaridad y la equidad social.

Promoción de la regeneración ambiental: la regeneración ambiental implica la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad y la reducción de la huella de carbono. Debe fomentarse y promoverse mediante políticas públicas y programas de incentivos. La regeneración ambiental es crucial para mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Además, puede fomentar la creación de empleos verdes y la innovación tecnológica.

Promoción de la economía social y solidaria: la economía social y solidaria se basa en la propiedad colectiva, la gestión participativa y la distribución justa

de los beneficios. Debe promoverse mediante políticas públicas y programas de apoyo.

Promoción de la democracia económica: la democracia económica implica la participación de los trabajadores, los consumidores y las comunidades en la toma de decisiones económicas. Debe fomentarse y promoverse mediante políticas públicas y programas de incentivos.

Aplicación de políticas públicas y regulaciones eficaces: es necesario aplicar políticas públicas y regulaciones eficaces que promuevan la transición hacia una economía solidaria, circular, regenerativa y democrática. Estas políticas y regulaciones deben diseñarse de manera participativa y someterse a seguimiento y evaluación continuos.

BIBLIOGRAFÍA

Alesina, A., & La Ferrara, E. (2005). Ethnic Diversity and Economic Performance. *Journal of Economic Literature*, 43(3), 762-800. <https://doi.org/10.1257/002205105774431243>

Becerra, M. (2004). La economía solidaria: alternativa para el desarrollo. *Observatorio del Desarrollo*, 1-15.

Boltanski, L., & Chiapello, E. (2002). *The New Spirit of Capitalism*. Madrid: Akal.

Buckley, Christopher. *Thank You for Smoking*. Random House, 1994.

Cattani, A. D., Laville, J. L., & Evers, A. (2009). *The Third Sector in Europe*. Edward Elgar Publishing.

Center on Budget and Policy Priorities. (2018). *A Guide to Statistics on Historical Trends in Income Inequality*.

Chandler, Alfred D. *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*. Belknap Press, 1977.

Chomsky, N. (1999). *Profit Over People: Neoliberalism and Global Order*. Seven Stories Press.

Chomsky, N. (2010). *Hopes and Prospects*. Haymarket Books.

Chomsky, N. (2013). *Occupy: Reflections on Class War, Rebellion and Solidarity*. Zuccotti Park Press.

Chomsky, N. (2015). *Masters of Mankind: Essays and Lectures, 1969-2013*. Haymarket Books.

Chomsky, N. (2017). *Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power*. Seven Stories Press.

Clark, Gregory. *Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton University Press, 2007.

Collier, Paul. *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford University Press, 2007.

De Soto, Hernando. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. Basic Books, 2000.

Economic Innovation Group. (2018). *Regenerative Economy*. <https://eig.org/regenerative-economy>

Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition*. https://www.ellen-macarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Report-2013.pdf

Gorz, A. (2004). *Ecology and Politics*. Madrid: El Viejo Topo.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199264315.001.0001>

Harvey, D. (2010). *The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism*. Oxford University Press.

Hayek, Friedrich. *The Constitution of Liberty*. University of Chicago Press, 1960.

Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). *Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and*

Cultural Backlash. HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP16-026. Harvard Kennedy School.

Laville, J. L. (2006). L'économie sociale et solidaire face au marché: genèse d'un nouveau champ de recherche. *Revue Internationale de l'économie sociale*, 292(1), 14-28.

Laville, J. L. (2010). The Solidarity Economy: An International Movement. *RCCS Annual Review*, 2, 3-41. <https://doi.org/10.4000/rccsar.202>

Laville, J. L. (2015). Changement social et économie solidaire: les événements dans le processus de recherche. *Nouvelle revue de psychosociologie*, 19(1), 181-194.

Laville, J. L., & Cattani, A. D. (2011). *The Social Economy: The Worldwide Making of a Third Sector*. Sage Publications.

Mance, E. (2006). A economia solidária como estratégia de desenvolvimento: a experiência brasileira. *Revista de Economia Política*, 26(4), 599-616.

Marx, Karl and Frederick Engels. Manifesto of the Communist Party (The Communist Manifesto). orig. pub. 1848.

Massachusetts Institute of Technology. (2019). The Circular Economy. <https://www.mit.edu/press/circular-economy/>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). The Circular Economy in Cities and Regions. <https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/The-Circular-Economy-in-Cities-and-Regions.pdf>

Peredo, A. M., & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. *Journal of world business*, 41(1), 56-65.

Pérez de Mendiguren, J. C. (2012). *Nueva economía solidaria*. Barcelona: Icaria.

Pew Research Center. (2015). The American Middle Class Is Losing Ground: No Longer the Majority and Falling Behind Financially.

Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>

Posner, Richard A. *A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression*. Harvard University Press, 2009.

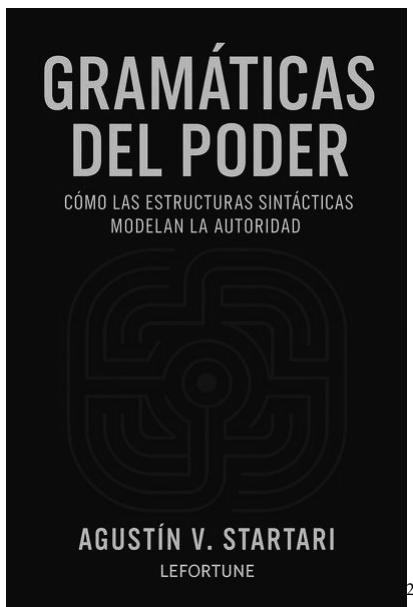
Regenerative Economy Coalition. (2020). What is Regenerative Economy? <https://regenerativeeconomycoalition.com/>

Semega, J., Kollar, M., Shrider, E. A., & Creamer, J. F. (2020). *Income and Poverty in the United States: 2019*. Current Population Reports, P60-270. U.S. Census Bureau.

Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. W. W. Norton & Company.

World Economic Forum. (2020). *The Global Social Mobility Report 2020: Equality, Opportunity and a New Economic Imperative*.

Did you love *Adios capitalismo*? Then you should read *Gramáticas del Poder*¹ by Agustín V. Startari!



1. <https://books2read.com/u/b5dRG1>

2. <https://books2read.com/u/b5dRG1>

En un mundo donde el poder se ejerce tanto mediante las armas como mediante las palabras, **Gramáticas del poder: Cómo las estructuras sintácticas configuran la autoridad** ofrece una investigación sin precedentes sobre la relación entre la forma del lenguaje y el ejercicio de la dominación. Al abarcar los discursos eclesiástico, político, jurídico y totalitario, esta obra demuestra que las elecciones gramaticales —como el uso de pasivas, construcciones impersonales, cláusulas subordinadas o enunciados deónticos— nunca son neutrales: configuran la percepción de la realidad, ocultan a los agentes del poder y refuerzan jerarquías simbólicas.

Desde las bulas papales hasta las sentencias judiciales, desde las proclamaciones imperiales hasta la retórica nazi y estalinista, el libro revela que la sintaxis es una tecnología política tan sofisticada como cualquier sistema de control físico. Con el apoyo de herramientas del análisis del discurso, la lógica formal, la lingüística computacional y los corpus históricos, **Gramáticas del poder** ofrece una nueva perspectiva

crítica sobre los mecanismos invisibles que regulan el pensamiento a través del lenguaje.

Al combinar claridad teórica con rigor académico, esta obra no solo examina el pasado, sino que también proporciona herramientas para interpretar el lenguaje del poder contemporáneo —desde los algoritmos hasta el discurso estatal— en un momento en que las palabras han vuelto a convertirse en un campo de batalla.

Read more at <https://www.agustinvstartari.com/>.

Also by Agustin V. Startari

Budismo Practico

Una vida de abundancia. La mente exitosa

Papeles de Trabajo

Creacion de un Imperio

La Alta Edad Media

Moldeando la Edad Media: Un nuevo orden
(280-1000)

Los Templarios: Marco introductorio

Gregorio X

Los apóstoles de la fe: en la pluma de Fray Bartolomé
de las Casas
Maquinaria de Propaganda
Ucrania y Rusia: Un conflicto en progreso
Adios capitalismo
Gramáticas del Poder
Christus Solus
Herejías Esenciales: La lucha del cristianismo temprano

Practical Buddhism
The Path to happiness
A Wealthy Life: The Successful Mind
The Abundant Mind:

Work Papers
Creation of an Empire
THE EARLY MIDDLE AGES

The Templars: An Introductory Framework
Gregory X
THE APOSTLES OF FAITH IN THE WRIT-
INGS OF FRIAR BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Propaganda Machinery
Ukraine and Russia: An Ongoing Conflict
Grammars of Power
Christus Solus
Essential Heresies

Standalone
The year of the dead Count

Watch for more at <https://www.agustinvstartari.com/>.



About the Author

Agustin V. Startari is a researcher, linguist, and author specializing in the intersection of **language, artificial intelligence, power, legitimacy, and historical sciences.**

His work examines how linguistic, discursive, and technological structures organize perceptions of authority, distribute responsibility, and shape the ways institutions, artificial intelligence systems, and structures of power represent political, historical, and social events.

His research brings together **linguistics, discourse analysis, artificial intelligence, historiography, theories of power, and studies of legitimacy**, with particular attention to the relationship between linguistic form, authority, and political responsibility.

He is the author of the research series *Grammars of Asymmetric Visibility: AI, Imperial Power, and the Syntax of Responsibility*, focused on the relationships between artificial intelligence, language, power, and the attribution of responsibility.

He is also the author of *Work Papers*, a series devoted to historical research, historiography, and the analysis of problems related to the historical sciences.

Additional works include *Propaganda Machinery* and *Christus Solus*, which further explore the intersec-

tions of discourse, ideology, institutional power, and historical interpretation.

His work combines linguistic research, historical analysis, and the systematic study of the ways language, institutions, and technological systems participate in the construction and legitimization of power.

Read more at <https://www.agustinvstartari.com/>.



About the Publisher

LEFORTUNE Publishing is a distinguished international publishing house dedicated to the publication and global distribution of high-quality fiction, historical works, literary essays, cultural studies, and nonfiction in English, Spanish, and German. With a strong commitment to editorial excellence, intellectual depth, and cultural exchange, LEFORTUNE Publishing develops carefully curated titles for readers and institutions worldwide.

Read more at <https://lefortunepublishing.com/>.

